

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0698 DE 2021

(13 de Julio)

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0469 del 18 de mayo de 2021, mediante la cual se adoptó una medida cautelar administrativa como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia, respecto del señor ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530.

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA EL CONSUMIDOR FINANCIERO

En ejercicio de sus facultades legales y, en especial, las conferidas en el artículo 108 y en el literal b) del numeral 5° del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en concordancia con lo previsto en el numeral 11° del artículo 11.2.1.4.10 del Decreto 2555 de 2010 y atendiendo lo previsto en los artículos 335 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y 74 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que mediante la Resolución número 0469 del 18 de mayo de 2021, la Superintendencia Financiera de Colombia, a través de la Superintendente Delegada para el Consumidor Financiero, ordenó, entre otras, “a las personas naturales (...) ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530, la **SUSPENSIÓN INMEDIATA** del ejercicio no autorizado, consistente en la promoción y publicidad de productos y/o servicios de la institución extranjera OMEGAPRO, a residentes colombianos para la realización de operaciones propias del mercado de valores, ni de cualquier otra sociedad domiciliada en el extranjero que no cuente con la respectiva autorización por parte de esta Superintendencia, bajo apremio de multas de acuerdo con lo previsto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en armonía con lo consagrado en el literal a) del numeral 1° del artículo 108 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero”.

SEGUNDO. Que el referido acto administrativo fue notificado de manera personal electrónica el 18 de mayo de 2021 al señor ESTEBAN PINTO SALAZAR, tal y como figura en la constancia¹ suscrita para el efecto y que obra en el expediente de la actuación administrativa.

TERCERO. Que en escrito radicado ante esta Superintendencia e incorporado al expediente de la actuación bajo el número 2020294180-106 del 1 de junio de 2021, el señor ESTEBAN PINTO SALAZAR, interpuso recurso de reposición contra la citada resolución y solicitó:

“(...) **REPONER EL ACTO ADMINISTRATIVO 0469 del 18 de mayo de 2021, REVOCANDO la decisión de los artículos uno y dos, y consecuentemente los artículos tercero a sexto en todo lo referente al señor ESTEBAN PINTO SALAZAR** identificado con cédula de ciudadanía 94.457.530, por haberse desvirtuado uno a uno los argumentos bajo los cuales la Superfinanciera (sic) de Colombia lo consideró sujeto de vigilancia y control como presunto promotor o difusor de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia. Además, se debe **REVOCAR LA DECISIÓN** por cuanto se afectan derechos fundamentales como lo anuncié al inicio de este escrito y provoca a futuro perjuicios a mi buen nombre, mi autonomía personal, mi libertad e iniciativa laboral y hasta la libertad de expresión de mis ideas u opiniones, pero muy especialmente atenta contra mis derechos fundamentales a la Defensa como manifestación del Debido Proceso (Artículo 29 Superior) y Derecho al buen nombre (Artículo 15 Superior), así como al Principio de Publicidad (Artículo 209 Superior).

Solicito del mismo modo, respetuosamente:

¹ Radicado 2020294180-86.

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0469 del 18 de mayo de 2021, mediante la cual se adoptó una medida cautelar administrativa como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia, respecto del señor ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530.

1- Cesar cualquier investigación que curse en mi contra por esa Superintendencia por los mismos hechos y bajo los mismos argumentos fundamentados en el presente recurso.

2- Ordenar la publicación de la decisión que revoca la medida en mi contra en un diario de amplia circulación nacional. (...)"

CUARTO. Que en el recurso de reposición presentado, el señor ESTEBAN PINTO SALAZAR requirió tener como pruebas aquellas aportadas en respuesta del 28 de diciembre de 2020 al requerimiento 2020294180-009-000, así como cinco capturas de pantalla que refiere en su escrito, dos de ellas relacionadas con el perfil de Facebook "Jose Rodriguez Emprendedor" y que corresponden a las imágenes citadas en Resolución 0469 del 18 de mayo de 2021 bajo los pies de pagina 53 y 54; y tres más, que hacen parte del contenido de la página web <https://omegapro.world/>; dirección aportada por el recurrente dentro de la actuación administrativa; todo lo anterior que hace parte del acervo probatorio.

QUINTO: Que esta Superintendencia procede a manifestarse frente a los motivos de inconformidad expuestos en reposición, los cuales se concretan en los argumentos que a continuación se transcriben, en el mismo orden que fueron presentados, seguidos de las consideraciones de esta Superintendencia frente a cada uno de ellos.

5.1. Argumentos del recurrente

El recurrente presenta sus argumentos en dos acápites principales; y en el segundo de ellos agrupa seis aspectos, como se expone a continuación:

5.1.1. De la Violación al debido proceso - Derecho de defensa y la vulneración del principio de publicidad.

"Sea lo primero declarar a través del presente recurso, que no he recibido, no he sido informado ni he sido notificado de ninguna investigación administrativa a mi nombre previamente a la decisión de la medida cautelar.

Declaro que fui notificado de requerimiento de información 2020294180-009-000 el 18 de diciembre de 2020 el cual fue atendido oportuna y debidamente el 28 de diciembre del mismo año, y ahora, el 18 de mayo de 2021 de una decisión administrativa (Resolución 0469 de 2021) que atenta contra mi derecho fundamental al debido proceso y derecho de defensa, pues se me está investigando y tomando medidas cautelares a partir de una investigación de la cual no he sido notificado.

La Superintendencia Financiera de Colombia no puede ser ajena y desconocer las leyes que le son aplicables a toda actuación administrativa de su competencia, en aras de la transparencia, esto es, que en aplicación al principio de publicidad, a través de la notificación, por cualquiera de las formas de notificación de los actos administrativos, debió darme a conocer el inicio de la investigación administrativa que se adelantaría en mi contra.

Así lo estudió la honorable Corte Constitucional en Sentencia C-136 del 17 de marzo de 2016 expediente D-10953 MP. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva donde se desarrolla el principio Publicidad y notificaciones como garantías del debido proceso administrativo diciendo (...)

Así pues, la Superintendencia Financiera debió atender con total respeto el principio de publicidad, de cara a garantizarme el derecho al debido proceso administrativo y derecho de defensa como administrado.

De la noticia o comunicación de la apertura de la investigación dentro de la cual se toma esta medida cautelar no existe prueba de notificación alguna, ya que el requerimiento de información de diciembre de 2020 de ningún modo puede considerarse como acto oficial de vinculación a la investigación (...)

Al no existir prueba de ello, vulnerados se encuentran mis derechos al debido proceso y derecho de defensa, al igual que el principio de publicidad en esta actuación cautelar".

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0469 del 18 de mayo de 2021, mediante la cual se adoptó una medida cautelar administrativa como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia, respecto del señor ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530.

5.1.2. De la Indevida motivación y falta de pruebas en la actuación administrativa

“Primera:

En el artículo décimo cuarto de la resolución 0469 de 2021 dice la Superfinanciera que “con el fin de verificar la información allegada, esta Superintendencia, en ejercicio de las facultades conferidas en el literal a) del numeral 4º del artículo 326 del EOSF, adelantó una actuación administrativa respecto de las nueve (9) personas señaladas de ser posibles promotores en Colombia de la institución del exterior OMEGAPRO, actuación que se desarrolló de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 964 de 2005, y el artículo 108 del citado Estatuto Orgánico, en concordancia con lo dispuesto en la parte 4 del Decreto 2555 de 2010”. (Subraya fuera de texto original)

Como sujeto, persona natural a quien se dirigió la ORDEN ADMINISTRATIVA, cabe reiterar que no soy comerciante ni tampoco realizo actividades del mercado de valores de que trata el artículo 3º de la Ley 962 de 2005, por demás, no estoy autorizado para realizar esas actividades en Colombia, pues no estoy constituido como comerciante, ni como entidad, sociedad o empresa.

Ahora bien, el artículo 108 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero establece los principios generales contenidos en el capítulo XVII sobre el ejercicio ilegal de las actividades financiera y aseguradora en la que se señala:

1. Medidas cautelares
2. Operaciones prohibidas para el caso de compañías de compra de cartera (factoring)
3. Autorización estatal para desarrollar la actividad aseguradora.
4. Organismos cooperativos que presten servicios de previsión y solidaridad.
5. Utilización de la palabra ahorros.

Téngase en cuenta que no realizo, ni aparece acreditado en legal forma en esta resolución, que me dedique a ninguna de las citadas actividades sometidas a vigilancia y control por parte de esa Superintendencia.

Y en cuanto al aparte 4 del Decreto 2555 de 2010 sobre el ofrecimiento de servicios financieros del exterior en Colombia, no tiene nada que ver mi afiliación a la plataforma digital de OMEGAPRO y la información que sobre mi experiencia personal comparta con potenciales clientes, con el ofrecimiento de servicios financieros como lo pretende enmarcar la Superfinanciera, pues insisto, ni trabajo con OMEGAPRO, ni tampoco soy empleado de OMEGAPRO, me afilié voluntariamente por mi propia cuenta y bajo mi propio riesgo a dicha plataforma.

Así se encuentra establecido en la publicación de Términos y Condiciones de la página WEB de OMEGAPRO:

“13. Legal, Fiscal y Cumplimiento

“Usted está sujeto a todas las leyes del estado, provincia y/o país en el que reside y desde el que accede al sitio web de OmegaPro y usted es el único responsable de obedecer esas leyes. El Afiliado no es un empleado de OmegaPro, ni de ninguna empresa asociada y no debe pretender serlo. (...)” Negrilla y subrayas fuera de texto original

La actuación administrativa descrita por la Superfinanciera la “desarrolló”, es decir, las “realizó” o las “llevó a cabo” dando atención a una serie de normas no aplicables a mi caso como persona natural, pues como he manifestado en diferentes oportunidades, **no soy comerciante y no realizo actos de comercio.**

Segunda:

Afirma la Superfinanciera en el punto 16.1. del artículo Décimo Sexto – Acerca de la información aportada en respuesta al requerimiento de esa Superintendencia que: “Mediante correo electrónico, los sujetos de la medida atendieron al requerimiento de información efectuado por esta Superintendencia, dando respuesta a las preguntas planteadas respecto de OMEGAPRO en los siguientes términos: (Las subrayas son propias para hacer énfasis)

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0469 del 18 de mayo de 2021, mediante la cual se adoptó una medida cautelar administrativa como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia, respecto del señor ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530.

Téngase en cuenta que en el requerimiento de la Superintendencia no se formuló ninguna pregunta, mucho menos respecto a OMEGAPRO. La Superfinanciera solicitó en los 8 puntos, información y documentación y en esos mismos términos le fue respondido cada uno de los puntos. No obstante, respecto a OMEGAPRO se le dio respuesta en los siguientes numerales que corresponden al requerimiento de información (mismos que incluye en el cuadro resumen donde hace la afirmación. Ver punto 16.1 de la resolución recurrida):

2) Documento explicativo del modelo de negocio en el cual se detallan las actividades comerciales que desarrolla el señor ESTEBAN PINTO SALAZAR, explicando las líneas de negocio que tenga implementadas, así como la relación y descripción de los productos y servicios que se ofrecen.

Respuesta: Me permito informar que NO realizo ninguna actividad comercial. No soy comerciante ni me encuentro inscrito como tal.

En relación al objeto descrito en el presente requerimiento, la actividad por la que indaga la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA desarrollada OMEGAPRO consiste en que las personas pueden adquirir un usuario pagando por una única vez USD \$29 como gastos de servicio a OMEGAPRO. Una vez teniendo un usuario, se ingresa con una contraseña personal y desde allí pueda acceder a una cuenta virtual que la persona puede operar desde USD \$100 hasta USD \$50.000.

Al cabo de 16 meses la persona recibirá un beneficio hasta del 200% del capital inicialmente destinado a la cuenta. La persona puede solicitar el capital inicialmente destinado a la cuenta en cualquier momento antes del plazo de los 16 meses, caso en el cual OMEGAPRO descuenta un porcentaje por retiro anticipado.

3) Listado detallado de inversionistas, clientes y/o afiliados a las diferentes líneas de productos y/o servicios que ofrece el señor ESTEBAN PINTO SALAZAR, informando por cada uno de ellos, al menos lo siguiente: nombre, identificación, dirección, ciudad, número de teléfono fijo y móvil y demás datos solicitados durante el desarrollo de la visita. Esta información se requiere en archivo Excel de acuerdo con las instrucciones de la comisión de visita.

Respuesta: NO tengo ningún vínculo de ninguna clase con terceras personas que se unen a la plataforma OMEGAPRO. Como se explica en el punto anterior cada uno lo hacen directamente, por lo que desconozco la información de los datos personales que requieren.

5) Copia de los contratos, convenios, acuerdos o documentos de vinculación que emplea el señor ESTEBAN PINTO SALAZAR, respecto de sus clientes, terceros y/o usuarios, así como los suscritos con sociedades nacionales, extranjeras y plataformas del exterior, vigentes al corte 30 de noviembre de 2020.

Respuesta: Es importante precisar que NO he pactado ningún contrato, convenio, acuerdo o documento de vinculación de ningún tipo con ningún tercero.

Para el caso que le interesa a la SUPERFINANCIERA respecto al documento de vinculación a OMEGAPRO, los términos y condiciones de adhesión pueden ser consultados en <https://www.omegapro.world/terms.php> de la página WEB de OMEGAPRO.

Obsérvese cómo, sin fundamental (Sic) legal o probatorio alguno, en los 3 puntos en los que hace énfasis la Superfinanciera y dice que “respondimos respecto a OMEGAPRO”; es reprochable cómo fui etiquetado con el apelativo “PLATAFORMA OMEGAPRO” y fui tratado tácitamente, sin ser vocero, representante, empleado, socio, o controlador de esta plataforma, como se desprende del encabezado del requerimiento 2020294180-009-000 recibido y contestado en diciembre de 2020, pues de no haber estado afiliado a la plataforma no me hubieran requerido esa Superintendencia con el fin de obtener información (...)

Por demás, no había ningún punto ni pregunta del requerimiento de información donde se mencionara a OMEGAPRO, como lo afirma la Superfinanciera.

Lo anterior para concluir la Superfinanciera diciendo en este numeral: “De acuerdo con lo expuesto por los sujetos de la presente medida, ninguno cuenta con contrato alguno que los vincule a la entidad extranjera OMEGAPRO en calidad de representantes, agentes o promotores, por lo que cualquier actividad relativa a la promoción de esa firma, se entiende la realizan por cuenta propia”.

La anterior conclusión a la que arrima la entidad se puede leer en la respuesta del punto 5 del requerimiento 2020294180-009-000 en el que se indica: “Para el caso que le interesa a la SUPERFINANCIERA respecto al

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0469 del 18 de mayo de 2021, mediante la cual se adoptó una medida cautelar administrativa como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia, respecto del señor ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530.

documento de vinculación a OMEGAPRO, los términos y condiciones de adhesión pueden ser consultados en <https://www.omegapro.world/terms.php> de la página WEB de OMEGAPRO”.

Ahora bien, las actividades económicas registradas en mi RUT son, 7020-Actividades de consultoría de gestión y 8544-Educación de universidades¹⁰, lo que permite deducir que mi actividad económica en ejercicio del desarrollo profesional lo realizo por cuenta propia, es decir, de manera independiente.

Tercera:

Dice la Superfinanciera en el numeral 16.3. De las actividades de promoción de la entidad extranjera OMEGAPRO por parte de los sujetos de la presente medida a través de redes sociales:

“(…)

Para mi caso particular, desconozco, o por lo menos no son presentados ni los argumentos ni las pruebas con la que la Superintendencia afirma que dar a conocer la plataforma OMEGAPRO consiste en una “estrategia de desarrollo de estructuras tipo multinivel, cierre de ventas, prospección de clientes” cuando, contrario a la terminología utilizada, se le informó que la persona interesada se afilia a través del otorgamiento de un usuario y una contraseña que le da acceso a la plataforma.

Esa afirmación resulta grave desde todo punto de vista, ni siquiera se hace el ejercicio de estructurar mi participación en la supuesta estrategia de promoción, la cual debe especificar qué tipo de promoción considera la Entidad es la que se hace por ese medio, confunde fatalmente la Superintendencia la difusión de la experiencia personal del afiliado a través de redes y canales digitales, con el perfil de una campaña o diseño publicitario o promocional y no obstante, considera así probada su investigación con consultas realizadas a la página WEB de acceso público de OMEGRAPRO y el seguimiento de mi actividad social en redes.

Pregunto: ¿qué prueba es esta?, ¿cómo está clasificada esta prueba dentro del régimen probatorio? ¿Con este único insumo probatorio, qué clase de investigación realizó la Superfinanciera para afectar con su decisión a un particular como yo, sin pruebas, para adoptar la desproporcionada medida cautelar que ahora recurro?

Téngase en cuenta que así se explicó y respondió según punto número 2 del requerimiento de información 2020294180-009-000 y ahora presenta la Superfinanciera una supuesta conclusión a una investigación a partir de una respuesta solicitada y proporcionada a ella misma:

“2) Documento explicativo del modelo de negocio en el cual se detallan las actividades comerciales que desarrolla el señor ESTEBAN PINTO SALAZAR, explicando las líneas de negocio que tenga implementadas, así como la relación y descripción de los productos y servicios que se ofrecen.

Respuesta: Me permito informar que NO realizo ninguna actividad comercial. No soy comerciante ni me encuentro inscrito como tal.

En relación al objeto descrito en el presente requerimiento, la actividad por la que indaga la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA desarrollada OMEGAPRO consiste en que las personas pueden adquirir un usuario pagando por una única vez USD \$29 como gastos de servicio a OMEGAPRO. Una vez teniendo un usuario, se ingresa con una contraseña personal y desde allí pueda acceder a una cuenta virtual que la persona puede operar desde USD \$100 hasta USD \$50.000.

Al cabo de 16 meses la persona recibirá un beneficio hasta del 200% del capital inicialmente destinado a la cuenta. La persona puede solicitar el capital inicialmente destinado a la cuenta en cualquier momento antes del plazo de los 16 meses, caso en el cual OMEGAPRO descuenta un porcentaje por retiro anticipado”. (Subrayas fuera del texto original)

De tal forma, que la interpretación de la entidad en su afán de calificar mi actividad personal en las redes sociales conforme a su parecer, dista de considerar y respetar bajo el principio de buena fe, lo que se le respondió.

Así mismo, en el **numeral 16.3.8. De la actividad de promoción del señor ESTEBAN PINTO SALAZAR** dice la Superfinanciera: “En el canal de YouTube “José Rodríguez”⁵³ se observa al señor ESTEBAN PINTO SALAZAR presentando el modelo de negocio de OMEGAPRO mediante el video “¿OmegaPro llegó para quedarse? por Mike Sims Esteban Pinto y Jose Rodríguez⁵⁴” publicado el 10 de julio de 2020:

A pie de página relaciona:

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0469 del 18 de mayo de 2021, mediante la cual se adoptó una medida cautelar administrativa como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia, respecto del señor ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530.

53 https://www.youtube.com/channel/UCw_OYvvnLZOUL1ESTsWYuuQ, fue público al 18 de abril 2021.

54 Tomado el 18 de abril de 2021 de https://www.youtube.com/watch?v=_cWSkZZhLIM el video se encuentra privado en la actualidad

Y dice seguidamente:

“En el minuto 2:39 el señor PINTO SALAZAR, señala “(...) ¿Qué hace la compañía OmegaPro? (...) le da la oportunidad de vivir una experiencia agradable en el mundo de las inversiones (...) una compañía que actualmente tiene personas con cuentas en más de 100 países a nivel mundial, que trabaja en el comercio de divisas, en un mercado regulado (...) una compañía dedicada en el mercado Forex, es un mercado de alta liquidez, más de 6 trillones dólares diarios, estamos hablando de cinco centros de operación, más de 90 traders, la mayoría certificados, que tenemos nuestro dinero funcionando en un bróker, en brokers, diferentes brokers, de los cuales, se los digo, no solamente son brokers certificados, de más de 19 años de experiencia, estamos hablando de brokers, escúchenmelo muy bien, que son auditados por la Price Water House Coopers, que es la firma de auditoría más importante del mundo, así es que tu dinero, va a estar auditado por la firma más importante que existe en el mundo de auditoría, listo, entonces en ese orden de ideas, tu dinero va a estar en el mejor lugar (...)” “(...) puedes aperturar cuentas desde 100 dólares, pero indudablemente lo ideal es que aperturar cuentas con mayor volumen, para que tengas mayor ganancia, la promesa de valor de la compañía, simple, te triplica el capital en 16 meses, pones 1.000 dólares en 16 meses o menos retiras 3.000 dólares, hablemos de 16 meses, la promesa de valor de la compañía es entre 8 y 11% mensual de ganancias sobre tu capital (...)” subrayado propio”.

Tal como lo afirma la Entidad, la plataforma OMEGAPRO se da a conocer a partir de la experiencia propia o particular de cada afiliado; no obstante, así como también lo advierte a pie de página en los numerales 53 y 54, la información transcrita la escoge de un video que actualmente es privado y no se encuentra disponible en la WEB, por lo no se visualiza, por lo tanto, no hay nada, y según informa también, está direccionado desde el sitio WEB de YOUTUBE cuyo suscriptor es el señor José Rodríguez quien se da a conocer como “Jose Rodríguez Emprendedor”, del cual no soy titular.(...)

Carece de sustento legal y probatorio los argumentos presentados por la Superfinanciera, pretendiendo responsabilizar a partir de supuestos no probados y confundiendo plenamente la actual figura moderna de la difusión de experiencias personales en canales digitales y redes sociales a nivel global con una ilegal promoción o publicidad de una compañía extranjera en Colombia, además con pruebas (videos) no visibles o disponibles y en todo caso, que están en cabeza de otro sujeto.

Cuarta:

En la página 31 de la Resolución 0469 de 2021 afirma la Superfinanciera:

“Con lo visto a la largo de la actuación administrativa y cuyas conclusiones se incluyen en la presente medida, se observa que los señores SEBASTIÁN ORTIZ PION, HUGO FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, DANIEL LEONARDO VELÁSQUEZ ALARCÓN, ANGIE VANESSA PINEDA AMAYA, KATERINE CARLOZAMA CASTRO, HAROL ALFONSO ALVARADO GALVÁN, JOSÉ ROLANDO RODRÍGUEZ LOAIZA y **ESTEBAN PINTO SALAZAR**, realizan actividades de promoción y publicidad de la entidad extranjera OMEGAPRO, para que ciudadanos colombianos adquieran en territorio nacional paquetes de inversión – “trading” – lo que les permite realizar operaciones complejas con activos financieros incluyendo el mercado FOREX, para ello mediante el esquema de “referidos” promovido por OMEGAPRO, consistente en un modelo de incentivos por vinculación de personas con características similares a un negocio multinivel, que permite una vez la persona se vincula a través de alguno de los paquetes de inversión que se les ofrece, optar por llevar más inversionistas a la mencionada firma, lo que les garantiza rentabilidades adicionales y el reconocimiento dentro de la organización, por lo que han sido recompensados con vehículos de alta gama y otros bienes de lujo contemplados en el paquete de beneficios por vinculación.

(Negrillas y subrayas fuera del texto original)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0698 DE 2021

Hoja No. 7

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0469 del 18 de mayo de 2021, mediante la cual se adoptó una medida cautelar administrativa como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia, respecto del señor ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530.

Tales afirmaciones suponen para la Superfinanciera un modelo de incentivos que en sus palabras tiene “características similares a un negocio multinivel”, es decir, lo supone, lo asimila, esto es, a partir de una consideración suya, que lo compara con un negocio multinivel, pero no lo establece o determina con certeza. Así las cosas, es evidente que la Superfinanciera desconoce la estructura del modelo de servicios ofrecidos por OMEGAPRO y pese a su falencia, se atreve a inferir sin soporte alguno, en este caso, que la operación obedece a una estructura multinivel.

En aplicación del principio de imparcialidad, que rige la Administración Pública el artículo 3º de la Ley 1437 de 2011 establece: (...)

Adicionalmente, concluye que los participantes, en especial, las personas naturales sujetos de la decisión adoptada en la Resolución ahora recurrida, “han sido recompensados con vehículos de alta gama y otros bienes de lujo contemplados en el paquete de beneficios por vinculación”, afirmación que se queda nuevamente en una especulación del funcionario, pues no logra probar que yo haya sido recompensado con tales “premios”, y que a su entender corresponden a vehículos de alta gama, sin evidencia o elemento probatorio alguno, señalando que también se han recibido otros bienes de lujo, sin determinar cuáles fueron, la cantidad, calidad, y tampoco cuándo me fueron entregados y más aún sin determinar las sumas o montos de las recompensas.

En gracia de discusión, puedo DECLARAR BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que no he recibido ningún vehículo de alta gama ni bien de lujo por dar a conocer la plataforma a través de mi propio testimonio.

Quinta:

En la misma página 31 de la Resolución 0469 de 2021 afirma la Superfinanciera:

“De tal suerte que, quienes realizan la promoción mediante el programa de “referidos” no advierten a las personas sobre el riesgo de hacer inversiones con activos financieros complejos y en el mercado FOREX, sin tener el conocimiento y la experiencia adecuada, lo que puede ocasionar la pérdida total de su inversión, dejando esto en un segundo plano para que las personas se sientan atraídas por los incentivos adicionales del programa de referidos”.

De acuerdo con el acervo probatorio citado por la Superfinanciera, en el considerando DÉCIMO SEXTO indica en el numeral 2) que tuvo acceso a la información disponible en el sitio web <https://omegapro.world/>, del mismo modo, dentro de la respuesta suministrada al requerimiento, se le indicó la dirección del sitio WEB para que pudiera hacer sus propias consultas.

Resulta equivocada y desacertada la afirmación de la Superfinanciera, pues en el documento publicado en <https://omegapro.world/risk-disclaimier.php> se presenta un link o vínculo que lleva a la información sobre la advertencia de los riesgos asociados a la decisión de adquirir una afiliación en la plataforma: (...)

Dice el texto:

Inversiones De Alto Riesgo

“El comercio de divisas, criptomonedas, materias primas y cualquier instrumento de negociación con margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede trabajar en su contra, así como para usted. Antes de decidirse a comprar un paquete de negociación debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión y el apetito por el riesgo. Existe la posibilidad de que pueda sufrir una pérdida de parte o la totalidad de su inversión inicial y, por lo tanto, no debe invertir dinero que no pueda permitirse perder. Usted debe ser consciente de todos los riesgos asociados con el comercio de divisas, y buscar el asesoramiento de un asesor financiero independiente si tiene alguna duda.

(Negrillas propias para hacer énfasis)

(...)

La misma advertencia la ha hecho esa Superintendencia en diferente normativa como es el caso de la Carta Circular 52 del 22 de junio de 2017, Referencia: Riesgos potenciales asociados a las operaciones realizadas con “Monedas Electrónicas- Criptomonedas o Monedas Virtuales” en el que señala también: (...)

b. La Superintendencia recordó a la entidades vigiladas, “que no se encuentran autorizadas para custodiar, invertir, intermediar ni operar con estos instrumentos, así como tampoco permitir el uso de sus plataformas para

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0469 del 18 de mayo de 2021, mediante la cual se adoptó una medida cautelar administrativa como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia, respecto del señor ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530.

que se realicen operaciones con MV”, y a su vez, **hizo un llamado al público en general al señalar que “corresponde a cada persona conocer y asumir los riesgos inherentes a las operaciones que realicen con este tipo de “monedas virtuales”, pues no se encuentran amparadas por ningún tipo de garantía privada o estatal, ni sus operaciones son susceptibles de cobertura por parte del seguro de depósito.”** (Negritas y Subrayas fuera de texto original)

Así como lo ha advertido la Superfinanciera, de manera responsable se hace la advertencia en el documento de Términos y Condiciones publicado en la página WEB de OMEGAPRO, pues el riesgo lo asume cada participante dependiendo su interés.

Igual sucede con el riesgo que asume cada interesado a pesar de las advertencias cuando invierte en un Fondo de Inversión Colectiva – FIC`S o en un Fondo Privado de Pensiones en los diferentes portafolios o multifondos (Conservador- Moderado - de Mayor riesgo) que tienen a disposición, con el riesgo de perder como ha sucedido en el último año de acuerdo a las cifras e informes publicados por la Superfinanciera.

Séptimo: (sic)

La Superfinanciera ordenó en su artículo segundo de la parte resolutive del acto administrativo recurrido, “retirar de todos los medios de promoción o publicidad empleados, incluidas redes sociales, cualquier término, palabra o alusión por la cual se pueda dar a entender equivocadamente al público en general y a sus clientes, **que se encuentra autorizado para promocionar los productos y/o servicios de la institución extranjera OMEGAPRO**, a residentes colombianos para la realización de operaciones propias del mercado de valores, ni de cualquier otra sociedad domiciliada en el extranjero que no cuente con la respectiva autorización por parte de esta Superintendencia.

Parágrafo 1: (...)”.

Subrayas y resaltado fuera de texto original.

Se **hace la aclaración** que de ninguna forma, en ningún aparte, situación u oportunidad, se ha hecho o se hace mención, que se cuenta con una AUTORIZACIÓN (MUCHO MENOS DE LA SUPERFINANCIERA DE COLOMBIA) al momento de presentar el modelo de negocio adoptado en la plataforma a los potenciales interesados, pues vale la pena mencionar que OMEGAPRO sí se encuentra legalmente constituido bajo las leyes de San Vicente y las Granadinas y así se informa en los Términos y Condiciones publicados en <https://omegapro.world/terms.php>:

“13.4. Ley aplicable. Estos términos y condiciones se regirán por las extensas leyes de San Vicente y las Granadinas”.

Por lo que la orden impartida es desproporcionada al pretender dar alcance a situaciones fácticas que ni se han dado, ni se mencionaron, ni se presentan como lo muestra la Superintendencia en su actuación administrativa (...)”

5.2. Consideraciones de la Superintendencia Financiera

5.2.1. Aspectos preliminares

Para abordar los argumentos planteados en el recurso de reposición, sea lo primero aclarar que en punto a la Resolución 0469 de 2021, nos encontramos frente a un acto administrativo de carácter particular mediante el cual se adopta una medida cautelar administrativa por el ejercicio no autorizado de actividades

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0469 del 18 de mayo de 2021, mediante la cual se adoptó una medida cautelar administrativa como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia, respecto del señor ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530.

propias del mercado de valores, sobre el que procede únicamente recurso de reposición², cuya interposición no suspende la ejecutoriedad del acto administrativo³ por expresa disposición legal.

Así las cosas, el recurso de reposición es la herramienta procesal que permite al administrado solicitar que, en la instancia en la que se produjo el acto administrativo, se aclare, modifique, adicione o revoque, cuando el mismo lesione los derechos de los administrados, para lo cual debe sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad⁴ y las pruebas que pretenda hacer valer como soporte de su argumentación. Con ello, debe el recurrente no solo expresar estos motivos sobre el acto recurrido sino también presentar puntualmente los argumentos y el material probatorio que sustenten su pretensión para que sean evaluados al momento de resolver el recurso y lograr lo solicitado, por lo que el relato de hechos privados de sustento jurídico o probatorio no puede servir de sustento para pretender la modificación de un acto administrativo, sino que es necesario que se expongan **razones en derecho** que demuestren la afectación sustancial o procedimental contenida en el acto acusado, acompañadas del soporte probatorio correspondiente.

En efecto, el artículo 77⁵ del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece expresamente como uno de los requisitos del recurso de reposición, el señalar y aportar el material probatorio que se pretenda hacer valer dentro de la actuación administrativa, siendo necesario que el recurrente señale en el texto de su recurso, los medios de prueba que sustenten cada supuesto de hecho que quiera probar, los cuales, de considerarse pertinentes, conducentes y útiles para la verificación de los hechos⁶ serán practicados dentro del término correspondiente no mayor a treinta (30) días⁷.

Al respecto, cabe señalar que el recurrente solicita se tenga como pruebas de sus afirmaciones, las señaladas en el recurso y aquellas aportadas en respuesta del 28 de diciembre de 2020 al requerimiento 2020294180-009-000; que en todo caso esta Autoridad incluyó en la actuación administrativa, tal como se observa en el expediente de inspección; y que se detalló en el numeral Décimo Sexto del acto que se recurre. El insumo probatorio ha estado disponible para consulta del sujeto de la medida; sin embargo, teniendo la posibilidad en ejercicio del derecho de defensa, no solicitó, de forma previa a la interposición del recurso de reposición, acceso a dicho material probatorio.

Una vez aclarado lo anterior, se continúa resolviendo el recurso de reposición interpuesto.

5.2.2. De la Violación al debido proceso - Derecho de defensa y la vulneración del principio de publicidad.

De acuerdo con los considerandos expuestos por el recurrente en este título, encuentra esta Superintendencia que el mismo desconoce la naturaleza de la investigación administrativa adelantada y

² "Artículo 74 CPACA. Recurso contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos:

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque.

2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito.

No habrá apelación de las decisiones de los ministros, Directores de Departamento Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos.

Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes legales y jefes superiores de las entidades y organismos del nivel territorial".

³ "Artículo 335 EOSF. Contra los actos administrativos de carácter particular expedidos por la Superintendencia Bancaria sólo procederá el recurso de reposición interpuesto en la forma establecida en el Código Contencioso Administrativo.

Las medidas cautelares y de toma de posesión que en ejercicio de sus funciones adopte la Superintendencia Bancaria, serán de aplicación inmediata. En consecuencia, el recurso de reposición que proceda contra las mismas no suspenderá la ejecutoriedad del acto administrativo".

⁴ Artículo 79 CPACA, numeral 2

⁵ "Artículo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos.

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos:

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido.

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.

3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. (...)".

⁶ Artículo 169 Código General del Proceso, prueba de oficio y a petición de parte

⁷ Artículo 79 CPACA

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0469 del 18 de mayo de 2021, mediante la cual se adoptó una medida cautelar administrativa como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia, respecto del señor ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530.

que diera lugar a la Resolución 0469 del 18 de mayo de 2021, al argüir la ausencia de notificación y la consecuente falta de publicidad, pues precisa que *“el requerimiento de información de diciembre de 2020 de ningún modo puede considerarse como acto oficial de vinculación a la investigación”*.

Al respecto, es relevante precisar, tal como se abordó en la decisión recurrida, que estamos en presencia de una actuación administrativa de naturaleza cautelar y especial con la cual se pretende establecer si se configura el ejercicio no autorizado de la actividad financiera; y que supone, un procedimiento diferente al procedimiento administrativo sancionatorio⁸, pues permite intervenir de manera inmediata las conductas de las personas involucradas en esta actividad ilegal.

Entonces, la actuación adelantada respecto del señor Pinto Salazar, correspondió al procedimiento administrativo especial en materia del ejercicio de actividades no autorizadas, que en todo caso cuenta con las garantías propias del derecho a la defensa y del debido proceso, a los que alude el recurrente, toda vez que el mismo se desarrolla de conformidad con los principios que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos⁹, en virtud del cual la gestión de la administración debe someterse a normas previamente establecidas y cumplir los objetivos propuestos en ellas, atendiendo el debido proceso el cual se deriva en el reconocimiento de los derechos de los administrados a conocer las actuaciones de la administración, el funcionario competente que inició la actuación y las normas vigentes que rigen la investigación, a pedir y controvertir pruebas, a ejercer el derecho de defensa e impugnar los actos administrativos.

Tal actuación, se inició con la expedición de una comunicación dirigida a la persona objeto de investigación, en la cual se informó de su apertura, el carácter especial de la misma, se puso de presente las facultades con las que cuenta este Organismo para tal fin¹⁰, así como las funciones correspondientes previstas en los numerales 8, 9, 10 y 16 del artículo 11.2.1.4.10 del Decreto 2555 de 2010¹¹, el número de funcionarios de este Organismo designados para realizar la actuación, los documentos por aportar, con la precisión acerca del derecho que le asiste a la persona investigada de suministrar todos aquellos que considere pertinente para demostrar que su actividad no se enmarca dentro de una actividad propia de nuestra vigilancia y control para ejercer así su derecho a la defensa, todo lo cual, se cumplió a cabalidad desde el 18 de diciembre de 2020, cuando fue puesto en conocimiento del señor Pinto Salazar el oficio número 2020294180-009-000¹².

En este, claramente, se le advierte que *“(…) se ha ordenado la realización de una visita de inspección para efectos de lo establecido en el artículo 108 del citado Estatuto Orgánico, en concordancia con lo dispuesto en la parte 4 del Decreto 2555 de 2020, sobre la promoción de servicios financieros de Instituciones del exterior; así como la realización de otras actividades propias de las entidades vigiladas por este Organismo”* refiriéndose a la Superintendencia Financiera de Colombia y que, en el encabezado, hace referencia a la plataforma OMEGAPRO; conociendo entonces desde ese momento el recurrente, la orientación puntual de la investigación y el ámbito de facultades que en torno a dicho asunto se prevé para este Organismo. Hecho que se verificó con la respuesta recibida de parte del señor Pinto Salazar al citado requerimiento, cuando en su contenido denota el interés de esta Entidad¹³. Así señaló:

“(…) la actividad por la que indaga la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA desarrollada OMEGA PRO consiste en que las personas pueden adquirir un usuario pagando por una única vez USD \$29 como gastos de servicio a

⁸ El procedimiento sancionatorio se encuentra regulado en los artículos 208, 209 y 211 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero - EOSF

⁹ Artículo 3 Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

¹⁰ Estatuto Orgánico del Sistema Financiero literal a) del numeral 4º del artículo 326.

¹¹ **“Artículo 11.2.1.4.10. Despacho del Superintendente Delegado para Protección al Consumidor Financiero y Transparencia.** (...) 8. Desplegar las medidas a su alcance para prevenir el ejercicio ilegal de la actividad financiera, aseguradora y del mercado de valores. 9. Adoptar las medidas cautelares y ejecutar las medidas de intervención administrativa previstas por las normas vigentes, para los casos de ejercicio ilegal de actividades propias de las entidades supervisadas. 10. Coordinar las medidas de intervención administrativa y las medidas cautelares que se profieran en las investigaciones relacionadas con el desarrollo de actividades, negocios y operaciones propias de las entidades supervisadas, sin la debida autorización estatal. 16. Ordenar y dirigir la práctica de visitas con el fin de obtener conocimiento sobre los asuntos de su competencia.

¹² 2020194180-020-000 Prueba de entrega 4-72 identificador del certificado E36954750-S estebanpintosalazar@gmail.com

¹³ 2020294180-031-000 Comunicación de 28 de diciembre de 2020 radicado

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0469 del 18 de mayo de 2021, mediante la cual se adoptó una medida cautelar administrativa como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia, respecto del señor ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530.

OMEGA PRO. Una vez teniendo un usuario, se ingresa con una contraseña personal y desde allí pueda acceder a una cuenta virtual que la persona puede operar desde USD\$100 hasta USD\$50.000. (...)”

Ahora bien, sobre el principio de publicidad la Corte Constitucional, en el ámbito del Debido Proceso, ha señalado¹⁴:

“(...) 5.4.1. Una de las garantías del derecho fundamental al debido proceso es el principio de publicidad, en virtud del cual, se impone a las autoridades judiciales y administrativas, **el deber de hacer conocer a los administrados y a la comunidad en general, los actos que aquellas profieran en ejercicio de sus funciones y que conduzcan a la creación, modificación o extinción de un derecho o a la imposición de una obligación, sanción o multa.**

5.4.2. El principio de publicidad se encuentra consagrado en el artículo 209 de la Constitución Política, que señala que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento entre otros, en el principio de “publicidad”, el cual se evidencia en dos dimensiones.

5.4.3. La primera de ellas, como el derecho que tienen las personas directamente involucradas, al conocimiento de las actuaciones judiciales y administrativas, la cual se concreta a través de los mecanismos de comunicación y la segunda, como el reconocimiento del derecho que tiene la comunidad de conocer las actuaciones de las autoridades públicas y, a través de ese conocimiento, a exigir que ellas se surtan conforme a la ley. Al efecto, esta Corporación en Sentencia C- 096 de 2001, dijo:

“Un acto de la administración es público cuando ha sido conocido por quien tiene derecho a oponerse a él y restringir el derecho de defensa, sin justificación, resulta violatorio del artículo 29 de la Constitución Política”
[...] **los actos de la administración solo le son oponibles al afectado, a partir de su real conocimiento, es decir, desde la diligencia de notificación personal o, en caso de no ser ésta posible, desde la realización del hecho que permite suponer que tal conocimiento se produjo, ya sea porque se empleó un medio de comunicación de aquellos que hacen llegar la noticia a su destinatario final [...], o en razón de que el administrado demostró su conocimiento [...].**

[...] la Corte no [...] puede considerar que se cumplió con el principio de publicidad, que el artículo 209 superior exige, por la simple introducción al correo de la copia del acto administrativo que el administrado debe conocer, sino que, para darle cabal cumplimiento a la disposición constitucional, debe entenderse que se ha dado publicidad a un acto administrativo de contenido particular, cuando el afectado recibe, efectivamente, la comunicación que lo contiene. Lo anterior por cuanto los hechos no son ciertos porque la ley así lo diga, sino porque coinciden con la realidad y, las misivas que se envían por correo no llegan a su destino en forma simultánea a su remisión, aunque para ello se utilicen formas de correo extraordinarias”

En la Sentencia SU- 447 de 2011, sobre el cumplimiento del principio de publicidad, esta Corte señaló:

“6.5.5. Publicidad de las medidas preventivas o cautelares administrativas

Como se ha observado en los acápites de esta providencia, los diferentes procedimientos administrativos tratan de manera diferente la forma de dar publicidad a las medidas preventivas o cautelares administrativas. En efecto, en algunos de ellos se presentan las medidas preventivas de inmediata ejecución y acompañada de flagrancia, sin que se realice referencia alguna a la publicidad de dichas decisiones. En otros, se señala la forma de comunicación y publicidad en relación con las sanciones pero no se relaciona lo correspondiente a las medidas preventivas. De lo visto, en algunos procedimientos administrativos se entiende garantizado el derecho de defensa respecto de la medida cautelar en si misma considerada, con la posibilidad de contradecir la sanción, agregando que dicho derecho fundamental se encuentra reforzado con la posibilidad de agotar la vía gubernativa y acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. Por último, la ley determina en otro procedimiento administrativo, que en razón a que la medida preventiva es de ejecución inmediata, contra ella no proceden recursos.

Otras conclusiones igualmente importantes se desprenden de los procedimientos administrativos anotados. Estos tienen como denominadores comunes y en relación con las medidas preventivas, los siguientes: (i) las medidas preventivas pueden ser aplicadas sin perjuicio de las posibles sanciones que determine la ley; (ii) Las medidas

¹⁴ Corte Constitucional, Sentencia C 341 de 04 de junio de 2014. Magistrado Ponente MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0469 del 18 de mayo de 2021, mediante la cual se adoptó una medida cautelar administrativa como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia, respecto del señor ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530.

preventivas se dirigen contra los administrados sometidos a control y vigilancia por la autoridad; y (iii) en ningún caso se establece la necesidad de que dichas medidas se comuniquen a terceros.”

5.4.4. El suma, el principio de publicidad, visto como instrumento para la realización del debido proceso, implica la exigencia de proferir decisiones debidamente motivadas en los aspectos de hecho y de derecho, y el deber de ponerlas en conocimiento de los distintos sujetos procesales con interés jurídico en actuar, a través de los mecanismos de comunicación instituidos en la ley[17], con el fin de que puedan ejercer sus derechos a la defensa y contradicción”.

Entonces, con la claridad evidenciada respecto del recurrente frente al requerimiento que en su momento recibió, pues sin dubitación alude a la investigación que esta Entidad se encontraba adelantando en relación con OMEGAPRO, sumado a la advertencia efectuada en el citado oficio sobre el análisis de la configuración de actividades de promoción de productos o servicios financieros de Instituciones del exterior; así como, al detalle normativo que en dicho oficio se plasmó, conoció el recurrente el alcance de la citada investigación, materializándose el reclamado principio de publicidad, de lo cual en efecto fue notificado.

Ahora bien, en punto de la naturaleza oficial que extraña el recurrente respecto del citado documento, cabe puntualizar que el mismo lo es por originarse dentro de las competencias conferidas a la Superintendencia Financiera de Colombia en el literal a) del numeral 4 del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y que se desarrolla en específico, en la función prevista en el numeral 8 del artículo 11.2.1.4.10 del Decreto 2555 de 2010 en la que se prevé:

“ARTÍCULO 11.2.1.4.10. Despacho del Superintendente Delegado para el Consumidor Financiero. Son funciones del Despacho del Superintendente Delegado para el Consumidor Financiero, las siguientes:

(...)

8. Ordenar, dentro del ámbito de su competencia, las investigaciones administrativas, la práctica de pruebas, los traslados a los interesados y adoptar las decisiones y medidas que resulten necesarias (...).”

Con todo, es claro que el oficio 2020294180-009-000 fue emitido bajo criterios de legalidad y representó la manifestación de esta Autoridad para dar a conocer al administrado de la orden de inspección iniciada, el objetivo de la investigación, las facultades conferidas en dicho ámbito a la Superintendencia Financiera y las prerrogativas a favor del señor Esteban Pinto Salazar. Adicionalmente, se otorgó las garantías para ejercer su derecho de defensa, precisamente al dar respuesta a la información solicitada e inclusive en la presente oportunidad con el recurso que aquí se resuelve.

5.2.3 De la Indevida motivación y falta de pruebas en la actuación administrativa

Resulta relevante iniciar por señalar que, la conducta objeto de pronunciamiento de esta Autoridad corresponde exclusivamente a la promoción de productos y/o servicios financieros de una institución del exterior a residentes en el país por parte del señor Esteban Pinto Salazar sin contar con autorización de este Organismo para ello, de tal suerte que la apreciación del recurrente extrae de contexto su conducta como promotor de la firma.

Así las cosas, recapitulamos los siguientes aspectos fundamentales para abordar los argumentos del recurrente:

1. OMEGAPRO es una entidad registrada en el exterior que ofrece a través de su sitio web productos y/o servicios para operar en el mercado FOREX, entre otros, la cual no cuenta con autorización alguna de esta Superintendencia para promover en el país sus productos y/o servicios.
2. El mercado FOREX es aquel en el que se realiza el intercambio de monedas extranjeras¹⁵, mediante diferentes instrumentos financieros.
3. Se considera intermediación en el mercado de valores el ofrecimiento de servicios orientados a negociar, tramitar, gestionar, administrar u ordenar la realización de cualquier tipo de operación

¹⁵ Artículo 31, Resolución Externa 04 de 2009 del Banco de la República

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0469 del 18 de mayo de 2021, mediante la cual se adoptó una medida cautelar administrativa como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia, respecto del señor ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530.

con valores, instrumentos financieros derivados, productos estructurados, fondos de inversión colectiva, fondos de capital privado u otros activos financieros, dentro de los que se encuentran las divisas, que generen expectativas de beneficios económicos¹⁶.

4. La intermediación de valores es una actividad propia del mercado de valores¹⁷
5. Las instituciones del exterior que pretendan promover o publicitar servicios financieros en el mercado colombiano o a sus residentes sólo podrán hacerlo a través de oficinas de representación, sociedades comisionistas de bolsa o corporaciones financieras mediante contrato de corresponsalía¹⁸.
6. En consecuencia, dichas instituciones no podrán realizar, directa **o indirectamente**, actos de promoción o de publicidad en territorio colombiano o a sus residentes, de la institución del exterior o de sus servicios¹⁹, sin contar con oficina de representación o contrato de corresponsalía.

Conforme a lo anterior, es claro que en el ejercicio de una actividad no autorizada que se concreta en el ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios del mercado de valores, incluido el mercado FOREX a residentes en el país, de entidades extranjeras no autorizadas para el efecto en Colombia, estará llamado a operar el numeral 1º del artículo 108 del EOSF; y conforme a este, se ordenará suspender de manera inmediata tales actividades, para lo cual, procederán las acciones cautelares que aseguren eficazmente los derechos de terceros de buena fe; así como, la toma de las medidas necesarias para informar al público.

Para el caso, se tiene que OMEGAPRO, entidad extranjera, ofrece a través de su sitio web productos y/o servicios financieros especialmente del mercado de valores, la cual no cuenta con oficina de representación en Colombia ni contrato de corresponsalía válido alguno con una comisionista de bolsa o corporación financiera vigilada por esta Autoridad, por lo que no le es permitido de manera alguna directa o indirectamente promover a residentes colombianos la vinculación a sus productos y/o servicios.

Ahora bien, el ordenamiento positivo vigente establece una excepción a la regla general planteada, esto es que no se requiera la constitución de una oficina de representación en el país o se suscriba un contrato de corresponsalía por parte de la entidad extranjera, siempre y cuando el requerimiento para adquirir los productos y/o servicios haya sido por iniciativa o petición del residente en Colombia y sin que haya mediado, para el efecto, algún acto de promoción o de publicidad directa o indirecta por parte de la institución del exterior en territorio colombiano o dirigida a sus residentes²⁰.

Este precepto fue contemplado por el legislador respetando la autonomía de la voluntad privada de los particulares, facultad mediante la cual pueden disponer de sus intereses con efecto vinculante y; por tanto, crear derechos y obligaciones, para el intercambio de bienes y servicios con los límites generales del orden público y las buenas costumbres,²¹ escenario en el que nos encontramos frente a las ofertas comerciales realizadas a través de la web, las cuales tienen como objetivo ser dirigidas al público en general a nivel mundial, por lo que cada persona será libre de escoger que oferta acepta, asumiendo los riesgos y obligaciones que implica el negocio jurídico propuesto.

Sin embargo, la autonomía privada de la voluntad tiene su límite con la intervención del Estado en las actividades económicas de los particulares²², y más aún en aquellas actividades relacionadas con el manejo, aprovechamiento e **inversión** de los recursos del público, las cuales fueron catalogadas como de interés público a nivel constitucional²³.

¹⁶ Parágrafo 3 Artículo 75 de la Ley 964 de 2005

¹⁷ Artículo 3º de la Ley 964 de 2005

¹⁸ Artículo 4.1.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010

¹⁹ Literal b) Parágrafo 2º Artículo 4.1.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010

²⁰ Numeral 5, Artículo 4.1.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010 en concordancia con los artículos 4.1.1.1.1 y 4.1.1.1.2 del mismo Decreto.

²¹ Corte Constitucional, sentencia C - 934 de 2013, Magistrado Ponente Nilson Pinilla Pinilla

²² Artículos 333 y 334 de la Constitución Política de Colombia

²³ Artículo 335 Constitución Política de Colombia.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0698 DE 2021

Hoja No. 14

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0469 del 18 de mayo de 2021, mediante la cual se adoptó una medida cautelar administrativa como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia, respecto del señor ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530.

Entonces, si bien cada residente colombiano es libre de elegir a su contraparte en sus relaciones comerciales, como vimos, el legislador estableció límites a esta libertad, que para el caso que nos ocupa se encuentra determinada en que sea directamente el residente quien acuda a la entidad extranjera para que le provea productos o servicios del mercado de valores, según sus necesidades e intereses de inversión y no que esta vinculación se lleve a cabo por intermedio de personas que realicen la oferta de los productos y servicios de la entidad extranjera.

De este modo, tal como se señaló en el numeral anterior, el señor Esteban Pinto Salazar no es un sujeto vigilado por esta Superintendencia, no obstante, si participó en la realización de actos de promoción de productos o servicios financieros del exterior en el mercado colombiano o a sus residentes sin que mediara de parte de la sociedad extranjera una oficina de representación, una sociedad comisionista de bolsa o una corporación financiera mediante contrato de corresponsalia, lo que supuso su actividad a título personal; y conllevó a que justamente se le aplicará el señalado procedimiento administrativo cautelar.

Con esa claridad, conviene entonces abordar lo aducido específicamente por el recurrente en la sección **“Primera”**, al expresar que no tiene una actividad comercial ligada a OMEGAPRO y que simplemente se trata de una afiliación voluntaria y bajo su propio riesgo a dicha plataforma, por lo que no le resulta aplicable las normas del artículo 108 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero - EOSF por el ejercicio ilegal de las actividades propias de las vigiladas por esta Entidad, como tampoco el aparte 4 del Decreto 2555 de 2010, relacionado con el ofrecimiento de servicios financieros del exterior en Colombia; por lo que manifiesta que ha actuado como una persona natural y que en ese sentido, no realiza actos de comercio.

Sobre el particular, resulta necesario indicar que la conducta o actividad de promoción censurada en la Resolución 0469 del 18 de mayo de 2021, no exige para efectos de su configuración alguna calificación de comerciante respecto del sujeto de la medida o de sus acciones como actos de comercio, ni siquiera de la acreditación de una mera afiliación previa a la sociedad del exterior; de modo que, surge irrelevante la aducida inexistencia de una actividad comercial ligada a OMEGAPRO o su afiliación o no, pues basta la evidenciada inexistencia de autorización de la Superintendencia Financiera y el ejercicio de actos de publicidad de productos o servicios de la sociedad del exterior, aún a título personal como lo arguye el recurrente, para estar en presencia de la actividad no autorizada que se reprocha. Tanto es así que, en el modelo de negocio planteado por la Sociedad OMEGAPRO no se requiere de tal calidad a efectos de promover los servicios o productos que esta ofrece; y, por el contrario, se anima a la vinculación de más personas sin que por ese hecho se configure algún vínculo laboral o comercial.

Al respecto, es oportuno a fin de ilustrar lo indicado abordar la actividad presentada por esa Sociedad del Exterior. Así las cosas, OMEGAPRO ofrece la posibilidad de realizar operaciones con acciones y otros activos financieros y, especialmente, señalan el **“trading”** que explican en los siguientes términos: *“OmegaPro ofrece una variedad de opciones para cuentas, excelentes, para todos nuestros clientes. Sin importar tu experiencia de trading, principiante o experto, nuestra plataforma de trading de nueva generación se puede adaptar fácilmente para adaptarse a tus necesidades y objetivos financieros”*, para lo cual el usuario debe acceder a la opción **“FOREX o CRYPTO trading”** proporcionar sus credenciales lo que le permitirá acceder a su cuenta y de esta manera realizar operaciones, para ello cuentan con diferentes paquetes de trading, de tal suerte que una vez adquirido ese paquete, la persona empieza a operar en el mercado según los activos e instrumentos de su interés.

Adicionalmente cuentan con un programa de **“Referidos”** mediante el cual OMEGAPRO *“brinda la posibilidad de **ganar refiriendo clientes a la plataforma comercial de OmegaPro**. Hemos desarrollado nuestro propio portal de socios único para la máxima transparencia de sus clientes referidos.”*, de tal suerte que, una vez las personas que adquieran un paquete de **“trading”**, pueden generar ingresos adicionales al referenciar nuevos clientes, quienes necesariamente deben adquirir cualquiera de los paquetes de trading que ofrece al público OMEGAPRO, lo que les da derecho a que a su vez puedan vincular a más personas que adquieran igualmente paquetes de inversión, y de esta forma, adicional a los beneficios sobre el capital invertido para realizar operaciones en el mercado FOREX a través de OMEGAPRO, pueden obtener beneficios según el nivel que alcancen y que depende del número de personas que vinculen y el monto de las inversiones

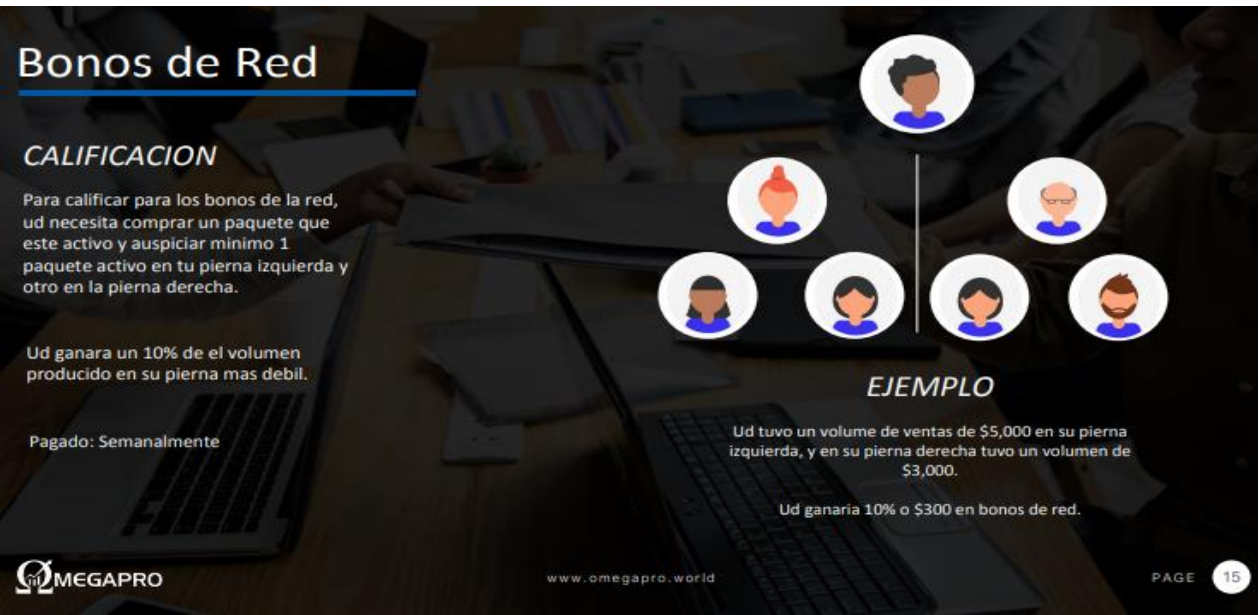
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0469 del 18 de mayo de 2021, mediante la cual se adoptó una medida cautelar administrativa como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia, respecto del señor ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530.

que éstas realicen, para lo cual esa entidad extranjera ha estructurado diversos niveles como incentivo por su liderazgo, lo que les permite a su vez acceder a los premios o bonos ofrecidos por la compañía.

De acuerdo con la información brindada al público por OMEGAPRO²⁴ en la presentación de su propuesta de negocio, indican como funciona su esquema de comisiones cuyos resultados dependen del esfuerzo dedicado a las ventas, tal como se identifica en la siguiente imagen²⁵:



Para obtener los bonos se debe adquirir un paquete y auspiciar la adquisición de paquetes por parte de otras personas, tal como se aprecia a continuación²⁶:



²⁴ Radicado 2020294180-052 Ver archivo PDF Anexo. "Spanish Presentation1

²⁵ Ibídem

²⁶ Ibídem

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0469 del 18 de mayo de 2021, mediante la cual se adoptó una medida cautelar administrativa como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia, respecto del señor ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530.

A su vez, dentro de los términos y condiciones de OMEGAPRO, se establece la posibilidad de “Presentar y recomendar clientes y afiliados” así señala: “Como afiliado, puede presentar y recomendar nuevos clientes y afiliados a OmegaPro Ltd. **TENGA EN CUENTA QUE OMEGAPRO LTD OTORGA RECOMPENSAS, BONIFICACIONES, COMISIONES O COMPENSACIONES POR REFERIR NUEVOS CLIENTES O AFILIADOS A OMEGAPRO LTD. La única forma en que Usted, como Afiliado, puede ser recompensado es si usted o cualquiera de los Afiliados que haya referido directa o indirectamente a OmegaPro adquiere algún producto o servicio de OmegaPro**²⁷. (negrilla fuera de texto original)

Como vemos, para poder hacer parte del esquema de referidos propuesto por OMEGAPRO no se requiere tener vínculos laborales, de intermediación o cualquier otro diferente al de la adquisición del paquete de inversión, pues de acuerdo con la información disponible al público en el sitio web de OMEGAPRO se señala: “El Afiliado no es un empleado de OmegaPro, ni de ninguna empresa asociada y no debe pretender serlo²⁸” hecho que quedó referido en la Resolución 0469 de 2021 y que fue debidamente sustentado mediante las pruebas documentales respectivas, en donde los sujetos de la medida, dentro de los que se encuentra el recurrente, afirmaron a esta Autoridad no tener vínculos de este tipo con dicha organización, por lo que no hubo pronunciamiento en contrario de esta Autoridad, pues en efecto fue un hecho probado a favor de los sujetos de la medida.

Ahora bien, en las secciones “**Segunda**” y “**Tercera**”, el recurrente ataca la insuficiencia probatoria acerca de su vinculación con la actividad de OMEGAPRO, al señalar que fue “etiquetado con el apelativo “PLATAFORMA OMEGAPRO” sin tener la calidad de “vocero, representante, empleado, socio, o controlador de esta plataforma” y por el contrario, sus actividades económicas se limitan a “Actividades de consultoría de gestión” y “Educación de universidades (...) lo que permite deducir que mi actividad económica en ejercicio del desarrollo profesional lo realizo por cuenta propia, es decir, de manera independiente”; y, manifiesta la ausencia probatoria que sustenta la supuesta promoción que se le atribuyó en el acto objeto de recurso, pues alude que “confunde fatalmente la Superintendencia la difusión de la experiencia personal del afiliado a través de redes y canales digitales, con el perfil de una campaña o diseño publicitario o promocional”.

Bajo este supuesto, y tal como se precisó en líneas previas, se reitera que el ejercicio de una actividad no autorizada, no exige calidad especial para quien la ejecuta; en otras palabras, basta la publicidad o promoción de los productos o servicios de la Sociedad del exterior a efectos de su configuración; de modo que, tampoco interesa la existencia de un nexo entre el señor Pinto Salazar y OMEGAPRO, como aquellos por él indicados de “vocero, representante, empleado, socio, o controlador de esta plataforma”; al paso que, tampoco es acertado señalar que fue “etiquetado” con el “apelativo” de OMEGAPRO, a pesar de realizar actividades económicas por cuenta propia, pues al margen de ello, la Resolución 0469 de 2021 soporta justamente los actos de promoción desarrollados en ejercicio de sus charlas, en el el cual es el mismo señor Pinto Salazar el que vincula su actividad personal al nombre OMEGAPRO.

Así se conoció que en el video 4 “¿OmegaPro llegó para quedarse? por Mike Sims Esteban Pinto y Jose Rodríguez²⁹” publicado el 10 de julio de 2020, el recurrente detalla la actividad desarrollada por OMEGAPRO para hacer alusión, incluyéndose en las afirmaciones efectuadas, al destino de la inversión, las bondades del modelo y las posibilidades de inversión:

“(...) ¿Qué hace la compañía OmegaPro? (...) le da la oportunidad de vivir una experiencia agradable en el mundo de las inversiones (...) una compañía que actualmente tiene personas con cuentas en más de 100 países a nivel mundial, que trabaja en el comercio de divisas, en un mercado regulado (...) una compañía dedicada en el mercado Forex, es un mercado de alta liquidez, más de 6 trillones dólares diarios, estamos hablando de cinco centros de operación, más de 90 traders, la mayoría certificados, que tenemos nuestro dinero funcionando en un bróker, en brokers, diferentes brokers, de los cuales, se los digo, no solamente son brokers certificados, de más de 19 años de experiencia, estamos hablando de brokers, escúchenmelo muy bien, que son auditados por la Price Water House Coopers, que es la firma de auditoría más importante del mundo, así es que tu dinero, va a estar auditado por la firma más importante que existe en el mundo de auditoria, listo, entonces

²⁷ Tomado del documento términos y condiciones disponible en: <https://omegapro.world/terms.php>

²⁸ Ibídem

²⁹ Tomado el 18 de abril de 2021 de https://www.youtube.com/watch?v=_cWSkZzhLIM el video se encuentra privado en la actualidad.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0698 DE 2021

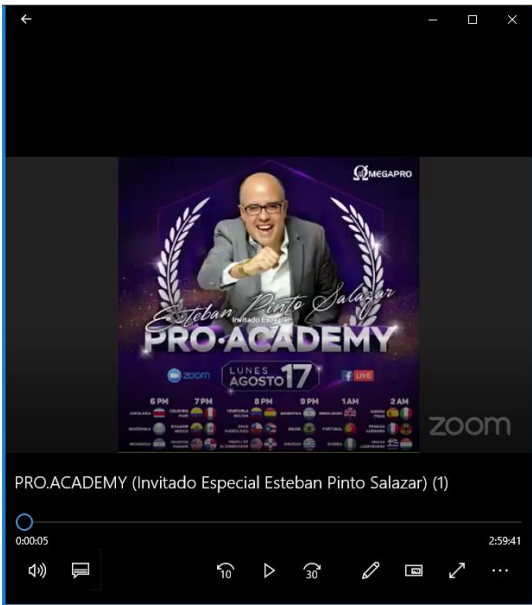
Hoja No. 17

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0469 del 18 de mayo de 2021, mediante la cual se adoptó una medida cautelar administrativa como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia, respecto del señor ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530.

en ese orden de ideas, **tu dinero va a estar en el mejor lugar (...)** **“(...) puedes aperturar cuentas desde 100 dólares, pero indudablemente lo ideal es que aperturar cuentas con mayor volumen, para que tengas mayor ganancia, la promesa de valor de la compañía, simple, te triplica el capital en 16 meses, pones 1.000 dólares en 16 meses o menos retiras 3.000 dólares, hablemos de 16 meses, la promesa de valor de la compañía es entre 8 y 11% mensual de ganancias sobre tu capital (...)** subrayado propio.

Aunada a dicha prueba, se cuenta además con los siguientes elementos que develan la publicidad efectuada por el señor Pinto Salazar sobre los productos de la compañía del exterior; material probatorio que, en todo caso, ha estado disponible para consulta de los sujetos de la medida y que para el caso que nos ocupa, no fue solicitado ni consultado por el recurrente, previo a la presentación del recurso que hoy se aborda.

Así, en vídeo titulado “Pro Academy- invitado especial Esteban Pinto Salazar” ³⁰; que se acompaña del logo de “Omegapro”, se observa como el recurrente, da apertura a la reunión con una charla que denomina “*Conviértete en una máquina de prospección masiva*” en la que aborda un método que señala estar dirigido para personas que asisten al entrenamiento y en el que hace énfasis en cómo interactuar comercialmente, para posteriormente intervenir, introduciendo la presentación de inversionistas y dando paso a la presentación de los paquetes que ofrece OMEGAPRO, para posteriormente introducir a un nuevo expositor y al respecto precisar: “*Muy buenas noches **para quienes nos acompañan en nuestra sala de negocios OMEGAPRO (....) Si tu estas aquí en la sala y estas tomando la decisión de realizar una inversión en la compañía OMEGA PRO puedes hacerle todas las preguntas que quieras a (...) o si por otro lado lo quieres hacer a nivel comercial quieres ser representante comercial de la compañía también te invito a lo mismo(...)** Adicional a eso, a todas las personas que ya hacen parte de nuestra fuerza comercial también pueden hacer preguntas que le hayan hecho algunos clientes en el transcurso de estos días (...)*”



Nótese entonces que, el señor Pinto Salazar invita a las personas a que se unan a OMEGAPRO en calidad de agentes comerciales, lo que sin duda es otra prueba del ofrecimiento que hace respecto de dicha compañía, sin contar con la autorización para el efecto.

De otro lado, en video titulado "OMEGAPRO Invitado Especial: Esteban Pinto Salazar"³¹, se advierte como el señor Pinto Salazar realiza la presentación del modelo de negocio de OmegaPro, y en el minuto 0:04:20 señala:

³⁰ 2020176009-025-000 “PRO.ACADEMY (Invitado Especial Esteban Pinto Salazar)”

³¹ 2020176009-018, Carpeta Anexa: Esteban Pinto/ Otros Esteban Pinto. Video “Presentación OMEGAPRO [Invitado Especial ESTEBAN PINTO SALAZAR].mp4

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0469 del 18 de mayo de 2021, mediante la cual se adoptó una medida cautelar administrativa como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia, respecto del señor ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530.

*“(…) mi nombre es Esteban Pinto, soy de Cali, he tenido la oportunidad de ser emprendedor,(…) , básicamente lo que hace OmegaPro es generar un producto, un servicio, un portafolio enfocado en ser una empresa que **te permite realizar inversiones de alto rendimiento, yo entiendo que hoy en día en el mercado, estamos hablando de inversiones de alto riesgo, se habla en el mercado de muchas ocasiones, pero nosotros hablamos de alto rendimiento, ahí hay un diferencial muy fuerte con el resto de oportunidades de inversión que encuentras en el mercado (…)**”*

(…)”



Tomado el 4 de septiembre del <https://www.facebook.com/OmegaProLatam/videos/156858925568208>

En este sentido es claro que, contrario a lo aducido por el recurrente se advierte con suficiencia y así se demostró en la Resolución 469 de 2020, que el señor Pinto Salazar, a título personal decidió realizar publicidad encaminada a promocionar la oferta de los paquetes de inversión de OMEGAPRO a residentes colombianos, a través de la participación en charlas, lo que permitió que personas se vincularan a esta propuesta de negocio, incumpliendo así el ordenamiento positivo vigente en la materia.

Sumado a ello, es claro que en ejercicio de su actividad económica personal, que según indica el impugnante se limita a “Actividades de consultoría de gestión” y “Educación de universidades”, no puede ejercer la promoción de productos y servicios propios del mercado de valores de una entidad del exterior sin contar con autorización para ello, como en efecto sucedió y frente a lo cual, no cabe el argumento aducido en escrito de reposición según el cual se trata de “(…) una mera “difusión de la experiencia personal del afiliado a través de redes y canales digitales, con el perfil de una campaña o diseño publicitario o promocional” ; pues aún en el desarrollo de actividades de consultoría o difusión de experiencias personales corresponde conocer y respetar los límites que el ordenamiento positivo impone, so pena de incurrir en las sanciones previstas por el ejercicio no autorizado de la actividad, hecho que incluso se resalta de lo expuesto por OMEGAPRO a sus clientes y afiliados, al señalar “Usted está sujeto a todas las leyes del estado, provincia y / o país en el que reside y desde el que accede al sitio web de OmegaPro y es el único responsable de obedecer esas leyes”³²

Como vemos, la actuación del señor Esteban Pinto Salazar, exige una carga de debida diligencia que conlleva deberes y responsabilidades, como el ejercicio de cualquier actividad lícita, prerrogativas estas que son de interés general y se sobreponen a los intereses particulares, por lo que está dentro del ámbito de control del recurrente conocer las normas aplicables en la materia antes de llevar a cabo una actividad para lo cual no tiene autorización, actuación que lo situó en el ejercicio no autorizado de la actividad financiera.

De ahí que independiente de la actividad comercial, profesional u objeto social abierto que desarrolle cualquier persona natural o jurídica, **NO** puede entenderse como una habilitación para que sean utilizados como instrumentos en el ejercicio irregular de la actividad financiera, como lo es promoción de productos y/o servicios financieros del exterior, sin autorización en particular del mercado de valores de una entidad extranjera a residentes colombianos, toda vez que, esta Superintendencia no ha desconocido la función lícita y la labor altruista que realizan las personas que efectúan charlas motivacionales y comparten experiencias de vida, la conducta reprochable del señor Pinto Salazar está determinada en actuar para

³² Tomado del documento términos y condiciones disponible en: <https://omegapro.world/terms.php>

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0698 DE 2021

Hoja No. 19

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0469 del 18 de mayo de 2021, mediante la cual se adoptó una medida cautelar administrativa como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia, respecto del señor ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530.

invitar a los particulares a realizar operaciones en un mercado como es FOREX, a través de una plataforma electrónica que se encuentra registrada en el extranjero; esto es que no están constituidas en Colombia, no cuenta con autorización ni vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia y, tampoco cuenta con una oficina de representación o la suscripción de un contrato de corresponsalía con una sociedad Comisionista de Bolsa o Corporación Financiera, vigiladas por esta Superintendencia, a efectos de promover o publicitar productos y/o servicios del mercado de valores del exterior a residentes colombianos.

Todo ello efectuado a través de charlas, en donde a través de su éxito personal promueve a la compañía OMEGAPRO, sus productos, virtudes e incentiva a través de las ganancias que por esa vía puede obtenerse, sin contar con el conocimiento y la experiencia adecuada respecto de las operaciones que allí se realizan, lo que puede generar la pérdida total de su inversión y la de todas las personas allí vinculadas, dejando esto en un segundo plano para que las personas se sientan atraídas por los incentivos adicionales del programa de referidos, conmovidos por las historias de superación que, como los sujetos de la medida emplearon para lograr la vinculación de más personas a participar en la oferta de negocio de OMEGAPRO.

De modo que, las decisiones de inversión y direccionamiento de los recursos del público deben ser sugeridas por un profesional debidamente acreditado y registrado ante este Organismo de Control, de allí que se haya establecido una normatividad especial en la materia, pues el mercado de divisas fluctúa constantemente atendiendo a diversos factores macroeconómicos, los cuales son imprevisibles, lo que puede originar la pérdida total de la inversión si la variación del tipo de cambio se direccionó en sentido contrario de los intereses del inversionista, de tal suerte que operaciones pasadas con resultados satisfactorios no aseguran el mismo resultado para operaciones futuras.

Así, en el entendido que los paquetes de trading ofrecidos por OMEGAPRO corresponden a la inversión de recursos en negociación de divisas – FOREX, lo que se enmarca en Colombia en una actividad propia del mercado de valores, la promoción de sus productos no puede ser realizada en territorio colombiano salvo que esa entidad extranjera cuente con una oficina de representación o haya celebrado un contrato de corresponsalía con una entidad vigilada, autorizada para el efecto, salvo que la adquisición de los productos haya sido requerida directamente por el consumidor a OMEGAPRO, situación contraria a lo sucedido en el caso objeto de análisis, donde el señor Pinto Salazar, a título personal participó en la promoción de la inversión de los productos ofrecidos por OMEGAPRO a residentes colombianos, a través de sus intervención en charlas, lo que apuntaba a incentivar la vinculación de personas y la adquisición de los paquetes de inversión ofrecidos por OMEGAPRO, incumpliendo así el ordenamiento positivo vigente en la materia.

Entonces a diferencia de la consideración del recurrente, esta Autoridad realizó una investigación exhaustiva, la cual tal como se mencionó en precedencia se encuentra disponible para consulta de los sujetos de la medida, de tal suerte que el hecho de no haber sido consultado el expediente por el señor Pinto Salazar para conocer la integridad de la actuación administrativa y que hace parte del acervo probatorio en el que se sustentó el acto que se recurre, para ejercer el derecho de defensa que le asiste a su representada, no es motivo ni argumento para descalificar la actuación de esta Autoridad, al señalar sin sustento probatorio alguno que *“Carece de sustento legal y probatorio los argumentos presentados por la Superfinanciera, pretendiendo responsabilizar a partir de supuestos no probados y confundiendo plenamente la actual figura moderna de la difusión de experiencias personales en canales digitales y redes sociales a nivel global con una ilegal promoción o publicidad de una compañía extranjera en Colombia, además con pruebas (videos) no visibles o disponibles”*.

Así, en desarrollo de la actuación administrativa adelantada, esta Autoridad logró establecer mediante los medios de prueba conducentes y pertinentes que el señor Esteban Pinto Salazar a través de charlas realizadas por medio de eventos masivos presenciales y virtuales, llevó a cabo la promoción y publicidad de la entidad del extranjero denominada OMEGAPRO, haciendo especial énfasis en las bondades diferenciales de la compañía y sus productos.

En ese orden, la actividad ilegal ejercida por el señor Pinto Salazar, no se encuentra determinada por el ejercicio de *“difundir experiencias personales en canales digitales y redes sociales”*, tampoco por el hecho de

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0469 del 18 de mayo de 2021, mediante la cual se adoptó una medida cautelar administrativa como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia, respecto del señor ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530.

llevar sus recursos propios a la compañía OMEGAPRO y tener por ello resultados favorables, sino por la promoción encaminada a que las personas se vieran incentivadas en la adquisición de paquetes de OMEGAPRO a través de sus charlas, a fin de lograr la vinculación de estas en la oferta de productos y/o servicios de esa entidad.

En cuanto a la toma de un video “*direccionado desde el sitio WEB de YOUTUBE cuyo suscriptor es el señor José Rodríguez quien se da a conocer como “Jose Rodríguez Emprendedor”, del cual no soy titular*”, es claro que esta Entidad no atribuyó al recurrente la titularidad de dicho perfil y en suma, fue la información recabada por la comisión de visita, en los contenidos públicos que dicho sea de paso se encuentran disponibles para consulta de los sujetos de la medida, lo que permitió corroborar la participación del señor Esteban Pinto Salazar en dichos videos, aspecto que en ningún momento es desconocido por él, por lo que se infiere que es el la persona que se presenta en el video direccionado y que interactuó para explicar qué hace OMEGAPRO y cuáles son las bondades del esquema que ameritaría la apertura de cuentas con esa compañía.

De otra parte, censura el recurrente en la sección “**cuarta**” el análisis realizado por esta Autoridad respecto del esquema de referidos que maneja la plataforma OMEGAPRO, cuando se indica en la resolución atacada que su configuración presenta características similares a un esquema multinivel, señalando que “*lo supone, lo asimila, esto es, a partir de una consideración suya, que lo compara con un negocio multinivel, pero no lo establece o determina con certeza*” y que “*la Superfinanciera desconoce la estructura del modelo de servicios ofrecidos por OMEGAPRO y pese a su falencia, se atreve a inferir sin soporte alguno, en este caso, que la operación obedece a una estructura multinivel*”.

Al respecto, parte el recurrente de consideración equivocadas, pues este Organismo nunca manifestó que el modelo de negocio correspondiera a una actividad multinivel, únicamente se aludió a tal término, a título ilustrativo, con el fin de precisar algunas características similares como ocurre y quedo ya suficientemente expuesto, ante la posibilidad de optar por llevar más inversionistas a la mencionada firma, a fin de recibir incentivos.

En efecto, de los términos y condiciones, se observa el apartado denominado “*Presentar y recomendar clientes y afiliados*” y que señala: “*Como afiliado, **puede presentar y recomendar nuevos clientes y afiliados a OmegaPro Ltd. TENGA EN CUENTA QUE OMEGAPRO LTD OTORGA RECOMPENSAS, BONIFICACIONES, COMISIONES O COMPENSACIONES POR REFERIR NUEVOS CLIENTES O AFILIADOS A OMEGAPRO LTD. La única forma en que Usted, como Afiliado, puede ser recompensado es si usted o cualquiera de los Afiliados que haya referido directa o indirectamente a OmegaPro adquiere algún producto o servicio de OmegaPro***”³³. (negrilla fuera de texto original)

Ahora, con fines ilustrativos de cara a las consideraciones del recurrente, conviene acudir al artículo 2º de la Ley 1700 de 2013 que dispuso: “*(...) Se entenderá que constituye actividad multinivel, toda actividad organizada de mercadeo, de promoción, o de ventas, en la que confluyan los siguientes elementos: 1. La búsqueda o la incorporación de personas naturales, para que estas a su vez incorporen a otras personas naturales, con el fin último de vender determinados bienes o servicios. 2. El pago, o la obtención de compensaciones u otros beneficios de cualquier índole, por la venta de bienes y servicios a través de las personas incorporadas, y/o las ganancias a través de descuentos sobre el precio de venta. 3. La coordinación, dentro de una misma red comercial, de las personas incorporadas para la respectiva actividad multinivel (...)*”

Como vemos, existen marcadas características en la oferta de negocio de OMEGAPRO que suponen, además de la adquisición de un paquete que ofrece esa entidad extranjera, para realizar inversiones en activos financieros dentro de los que se encuentran las divisas, auspiciar la vinculación de más personas que a su vez adquieran estos paquetes, bajo el incentivo de una recompensa al afiliado por referido directo o indirecto.

³³ Tomado del documento términos y condiciones disponible en: <https://omegapro.world/terms.php>

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0469 del 18 de mayo de 2021, mediante la cual se adoptó una medida cautelar administrativa como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia, respecto del señor ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530.

Ahora bien, en lo atinente al argumento planteado en el recurso según el cual, también estaría esta Superintendencia haciendo suposiciones respecto de los “*premios*” recibidos por el señor Esteban Pinto Salazar “*sin determinar cuáles fueron, la cantidad, calidad, y tampoco cuándo me fueron entregados y más aún sin determinar las sumas o montos de las recompensas*”; es claro que, esta Entidad no señaló al señor Pinto Salazar como destinatario específico de algún premio o recompensa; y en todo caso, el razonamiento expuesto, que además debe leerse en contexto con los argumentos previos y posteriores expuestos en la resolución, pues apuntan a ilustrar la operativa del esquema de referidos que deviene del modelo de incentivos que se anuncia desde los términos y condiciones de OMEGAPRO, citado en precedencia.

En ese sentido, en la Resolución 0469 del 18 de mayo de 2021 se indica con absoluta claridad el entendido de esta Entidad cuando expresa: “*De otra parte, cuentan adicionalmente con un programa de “Referidos” mediante el cual OMEGAPRO “brinda la posibilidad de ganar refiriendo clientes a la plataforma comercial de OmegaPro. Hemos desarrollado nuestro propio portal de socios único para la máxima transparencia de sus clientes referidos.”, de tal suerte que, una vez las personas que adquieran un paquete de “trading”, pueden generar ingresos adicionales al referenciar nuevos clientes, quienes necesariamente deben adquirir cualquiera de los paquetes de trading observados en la imagen anterior, lo que les da derecho a que a su vez puedan vincular a más personas que adquieran igualmente paquetes de inversión, y de esta forma, adicional a los beneficios sobre el capital invertido en OMEGAPRO, pueden obtener beneficios según el nivel que alcancen y que depende del número de personas que vinculen y el monto de las inversiones que éstas realicen. La firma ha estructurado diversos niveles como incentivo por su liderazgo, anunciando la entrega de bienes de lujo tales como viajes, joyas y vehículos de alta gama, para lo que anuncian lo siguiente*”³⁴ (negrilla fuera de texto original)

Entonces nótese que el ejercicio de la Superintendencia en este aspecto se limitó a citar y parafrasear la presentación disponible en la página web de OMEGAPRO; máxime cuando, tampoco interesa a efectos de la configuración de la promoción por parte del recurrente, si recibió o no los anunciados premios por parte de OMEGAPRO, la cantidad, calidad o el cuándo, como pareciera entenderlo el impugnante.

En la parte “*quinta*”, reprocha el recurrente la aseveración efectuada por esta Entidad respecto de la ausencia de advertencia del riesgo que supone la inversión en activos financieros complejos y en el mercado FOREX, respecto de lo cual encuentra esta Entidad, que nuevamente descontextualiza el alcance del razonamiento, pues es claro que tal aseveración se predicó de los sujetos de la medida respecto de la actividad de promoción y no de OMEGAPRO, tal como se lee a continuación:

*“De tal suerte que, **quienes realizan la promoción mediante el programa de “referidos”** no advierten a las personas sobre el riesgo de hacer inversiones con activos financieros complejos y en el mercado FOREX, sin tener el conocimiento y la experiencia adecuada, lo que puede ocasionar la pérdida total de su inversión, dejando esto en un segundo plano para que las personas se sientan atraídas por los incentivos adicionales del programa de referidos*”³⁵.

De modo que pretende el recurrente soportar la falta de advertencia en los discursos y charlas promocionales, en el contenido previsto en la página web de OMEGAPRO; a pesar de que, a lo largo de su escrito de reposición ha evidenciado su interés por desligar cualquier vínculo con dicha compañía.

Con todo, no debemos perder de vista que el interés de esta Entidad respecto de la promoción evidenciada por el recurrente, encuentra asidero en la naturaleza de las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos del público, pues en Colombia por disposición del artículo 335 de la Constitución Política, estas son de interés público y sólo pueden ser realizadas previa autorización del Estado, quien, a través de esta Superintendencia confiere la autorización correspondiente y las habilita para ejercer cualquiera de dichas actividades. Veamos:

Sobre el significado de tal intervención, la jurisprudencia ha señalado:

³⁴ Resolución 469 de 18 de mayo de 2021. Página 14.

³⁵ Resolución 469 de 18 de mayo de 2021. Página 31

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0469 del 18 de mayo de 2021, mediante la cual se adoptó una medida cautelar administrativa como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia, respecto del señor ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530.

“(…) el artículo 335 constitucional hace explícito el interés público de las actividades financiera, bursátil, aseguradora y de cualquiera otra relacionada con el manejo, el aprovechamiento y la inversión de los recursos de captación y del ahorro privado, y en consecuencia estatuye que se ejercerán previa autorización del Estado y conforme a la ley, ‘la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito’.”³⁶

Frente a la actividad de interés público, la misma no fue definida por el constituyente, sin embargo, este concepto ha sido desarrollado vía doctrinal y jurisprudencial, definiéndolo como:

“aquella actividad privada que involucra un interés público, y que está sometida a un régimen de autorización y no de concesión. ARIÑO ORTIZ resume el concepto adoptado originalmente por la doctrina italiana en cuatro puntos, diciendo que las actividades de interés público: 1. Son actividades privadas, en otras palabras, actividades que no están a cargo del Estado y, por ende, tampoco lo está su titularidad.; 2. Son de interés general por las implicaciones que tiene su prestación, 3. Están dirigidas al público en general y no a un sector específico y, por lo tanto, reducido, y 4. Se hallan sometidas a un régimen de autorización y no de concesión como de ordinario sucede con los servicios públicos en la teoría tradicional”³⁷.

A nivel jurisprudencial, la Corte Constitucional ha citado sobre el particular:

“La actividad aseguradora, como subsector económico, comparte con la actividad financiera, la actividad bursátil, y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público, la calidad de ser una actividad económica explícitamente mencionada en la Constitución para los siguientes tres efectos:

- 1. Establecer que corresponde al Congreso dictar por medio de leyes las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para efectos de regularla (Literal d) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución);*
- 2. Determinar que corresponde al Presidente de la República ejercer, de acuerdo con la ley a que se refiere el punto anterior, la inspección, vigilancia y control sobre las personas que la ejercen (numeral 24, artículo 189 de la Constitución), y*
- 3. Definir que se trata de una actividad de interés público, y por ende, sólo puede ser ejercida previa autorización del Estado, conforme a la ley, reiterando que al legislador corresponde la regulación de la forma en la cual el gobierno intervendrá en ella (artículo 335 de la Constitución).*

Existen varias razones por las cuales el constituyente estableció de manera explícita una arquitectura institucional tan detallada para la regulación de subsectores económicos específicos como el asegurador, el financiero y el bursátil. De hecho, la Constitución misma señala el punto de partida de dichas razones, al indicar que se trata de actividades de “interés público”. Ese interés público nace, por supuesto, del hecho de que se trata de actividades en las que se maneja, aprovecha e invierten recursos captados del público, rasgo que también reconoce la propia Constitución. Son actividades, por lo demás, que canalizan de manera importante el ahorro de la nación hacia la inversión, lo cual enfatiza su definición como actividades de interés público. (Negrilla fuera de texto).

Sin embargo, estas razones no bastan para explicar el especial cuidado que la Constitución pone en el diseño del régimen institucional y de competencias regulatorias de estas actividades específicas, pues existen muchos otros sectores económicos que pueden considerarse de interés público, y que de alguna manera manejan y aprovechan cuantiosos recursos del público. Piénsese, por ejemplo, en los manejos de tesorería de un gran conglomerado industrial, o en la importancia que para el interés público tienen ciertos sectores agrícolas o de servicios. No obstante, respecto de ellos el constituyente no hizo una mención tan expresa, específica y minuciosa.

*Lo que tienen en común las actividades financieras, bursátiles, aseguradoras y otras afines, que las distingue de otras actividades económicas igualmente importantes, pero no sometidas a la fuerte intervención estatal que para aquellas autoriza la Constitución, es que **dependen para su correcto funcionamiento de un voto colectivo, permanente y tácito de confianza, cuyo quebrantamiento puede generar consecuencias catastróficas para la economía de un país.** La cotidianidad rutinaria de las transacciones bursátiles, aseguradoras y financieras, a veces opaca el hecho de que cada una de ellas está fundada en una presunción intangible y frágil, pero esencial, en el sentido de que será cumplida la obligación a futuro a que se compromete la respectiva entidad financiera, bursátil o aseguradora. Esa presunción no tiene garantía distinta a la solidez misma del sistema. Cuando una persona deposita en una cuenta bancaria una suma de dinero, presume y confía que al día siguiente podrá retirar esa misma suma, más las anteriores que hubiese podido depositar. **Esa presunción sólo es posible gracias a una confianza sistémica, no explícita, pero verdadera, en la solidez de la entidad financiera respectiva.** Lo mismo puede afirmarse respecto de quien compra un título bursátil, que espera, al vencimiento del mismo, que se le pague la suma representada en el título. Sólo la posesión del título le permite confiar en el cumplimiento de la obligación. Y en el caso de quien suscribe un contrato de seguros, la persona paga una prima en el entendido de que, de ocurrir el siniestro descrito en el contrato, le será pagada una indemnización o beneficio. No existe ninguna garantía de que ello ocurrirá, excepto la derivada de la seriedad de la compañía de seguros, fruto de que ella cumple con los estándares regulatorios y prudenciales preestablecidos. En estos tres ejemplos sencillos, que se pueden extrapolar a todo tipo de*

³⁶ CORTE CONSTITUCIONAL, C-136 de 1999.4 de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999). Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO

³⁷ López Roca Luis Fernando. “El principio de igualdad en la actividad financiera”. Universidad Externado de Colombia. 2012.

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0469 del 18 de mayo de 2021, mediante la cual se adoptó una medida cautelar administrativa como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia, respecto del señor ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530.

transacciones financieras, es la confianza en la solidez del sistema financiero, originada a su vez en la confianza en la calidad, seriedad y operatividad de la regulación estatal sobre ella, la que permite que las personas acepten operar a través del sistema y realizar transacciones con él.

La actividad financiera, bursátil y aseguradora es, pues, una actividad esencial para el desarrollo económico; constituye principal mecanismo de administración del ahorro del público y de financiación de la inversión pública y privada y está fundada en un pacto intangible de confianza. Se trata de la confianza por parte de los usuarios en que las obligaciones derivadas de la respectiva obligación serán rutinariamente satisfechas. Y esa confianza está a su vez cimentada en una regulación adecuada y en la convicción pública de que las entidades que hacen parte del sistema están vigiladas técnica y profesionalmente. Esa confianza ha de ser permanente, continua, y totalmente extendida para que el sistema funcione. La historia económica global reciente demuestra que este no es un planteamiento meramente teórico: en el momento en que se rompe la confianza, el sistema financiero se paraliza, y con él la economía que de él depende. Las personas empiezan a desconfiar del sistema, y de su capacidad de cumplir la promesa contenida en cada una de las millones de transacciones diarias que dentro de él se realizan. El mantenimiento de esa confianza pública es el objetivo principal de la intervención del estado en este tipo de actividades. En eso, principalmente, consiste el carácter de “interés público” que la Constitución le imprime a este tipo de actividades, y de ahí el particular diseño institucional con el cual el constituyente dotó al Estado para permitirle la intervención en este tipo de actividades económicas³⁸. (Negrilla fuera de texto).

Como vemos, no fue un capricho del legislador enmarcar la actividad financiera como de interés público, pues en su ejercicio se canalizan los recursos de la sociedad, por ello se requiere que únicamente sea ejercida por profesionales autorizados previo el cumplimiento de unos requisitos de carácter, idoneidad, responsabilidad, solvencia patrimonial³⁹.

Por ello, cuando la actividad financiera es desarrollada por personas no autorizadas se hace necesaria la actuación inmediata de las Autoridades con el fin de prevenir y controlar tal actividad ilegal a efectos de preservar el interés público en los términos del artículo 335 constitucional anteriormente citado.

Por lo anterior, uno de los objetivos de esta Superintendencia consagrado en el artículo 325, numeral 1, literal d) del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (en adelante EOSF), consiste en “Evitar que las personas no autorizadas, conforme a la ley, ejerzan actividades exclusivas de las entidades vigiladas.” es decir, personas diferentes a las instituciones que sí son vigiladas, condición que no ostenta su representada.

A su turno, la normatividad especial propia del mercado de valores enmarcada en el Ley 964 de 2005 y el Decreto 2555 de 2010, tiene como finalidad “la protección de los derechos de los inversionistas, la promoción del desarrollo y la eficiencia del mercado de valores, la prevención y manejo del riesgo sistémico y la preservación del buen funcionamiento, la equidad, la transparencia, la disciplina y la integridad del mercado y, en general, la confianza del público en el mismo”⁴⁰, de modo que, han definido y reglamentado lo que se entiende como actividades del mercado de valores, en qué condiciones se pueden desarrollar y que personas la pueden ejercer, quienes se consideran participantes del mercado, por lo que deberán contar con la previa inscripción en el sistema de información así como con la supervisión de este ente de Control.

Luego, este objetivo de protección a los inversionistas se extiende a la oferta de productos y/o servicios propios del mercado financiero de entidades extranjeras, quienes para poder llevar a cabo esta actividad en territorio colombiano de manera directa o indirecta deben cumplir con una serie de requisitos especiales.

En punto de la última sección del recurso que se titula como “**Séptima**” y que correspondería según la numeración presentada a la sexta, el señor Esteban Pinto Salazar manifiesta que “de ninguna forma, en ningún aparte, situación u oportunidad, se ha hecho o se hace mención, que se cuenta con una AUTORIZACIÓN (MUCHO MENOS DE LA SUPERFINANCIERA DE COLOMBIA)” y que “(.) OMEGAPRO sí se encuentra legalmente constituido bajo las leyes de San Vicente y las Granadinas”.

Al respecto, resulta extraño para esta Superintendencia el señalamiento del recurrente, pues de nuevo incurre en aseveraciones impropias, pues en la Resolución recurrida no existe señalamiento alguno

³⁸ Corte Constitucional, sentencia C – 640 de 2010.

³⁹ Artículo 53 del Estatuto orgánico del Sistema Financiero.

⁴⁰ Exposición de motivos Ley 964 de 2005 Gaceta del Congreso 698.

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0469 del 18 de mayo de 2021, mediante la cual se adoptó una medida cautelar administrativa como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia, respecto del señor ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530.

relacionado con haberse anunciado como autorizado por esta Entidad; contrario es, el énfasis que en dicha decisión se hace al precisar que, para el ejercicio de una actividad propia del mercado de valores se exija la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia a efectos de promocionarla y desarrollarla, tal como se expuso previamente y de forma extensa en el numeral “Décimo séptimo” de la Medida Administrativa.

Ahora, al margen de que OMEGAPRO se encuentre debidamente constituida como se aduce en el recurso, es claro que de acuerdo con nuestro ordenamiento positivo, “la ley es obligatoria tanto a los nacionales como a los extranjeros residentes en Colombia”⁴¹, lo que no es otra cosa que el principio de territorialidad que la Corte Constitucional ha definido como: “fundamento esencial de la soberanía, de acuerdo con el cual cada Estado puede prescribir y aplicar normas dentro de su respectivo territorio, por ser éste su “natural” ámbito espacial de validez. Forman parte integral de este principio, las reglas de “territorialidad subjetiva” (según la cual el Estado puede asumir jurisdicción sobre actos que se iniciaron en su territorio pero culminaron en el de otro Estado) y “territorialidad objetiva” (en virtud de la cual cada Estado puede aplicar sus normas a actos que se iniciaron por fuera de su territorio, pero culminaron o tuvieron efectos sustanciales y directos dentro de él (...)) Por su solidez e importancia, se puede considerar al principio de territorialidad como la regla general a aplicar, y a los demás principios como sus excepciones, puesto que legitiman el ejercicio extraterritorial de la jurisdicción. Estos últimos operan en un doble sentido: por una parte, permiten que un Estado determinado imponga sus leyes a personas, situaciones o cosas que no se encuentran dentro de su territorio; y por otra, obligan al mismo Estado a aceptar que, en ciertos casos, se apliquen las leyes extraterritoriales de naciones extranjeras a personas, situaciones o cosas que se encuentran u ocurren dentro de su territorio (...)”⁴².

De manera que, al no ser OMEGAPRO una sociedad registrada en el país, no estar sometida a inspección y vigilancia de esta Superintendencia y al no haber ejecutado actividad alguna en territorio colombiano no le es aplicable la normatividad colombiana a esa compañía, máxime cuando la actividad de promoción de sus productos y/o servicios en efecto no los realiza la entidad, tal como fue establecido en la resolución que se recurre como en el presente acto, pero si el recurrente a título personal y no en representación de esa entidad.

Para finalizar este acápite, resulta pertinente abordar lo que concretamente denominó el recurrente, sin acercarse a su concepto, como “indebida motivación” y que desarrolla a través de los puntos ya abordados, para lo cual el planteamiento propuesto desde la definición del concepto de falsa motivación presentado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, resulta relevante, así ha explicado que esta “causal autónoma e independiente se relaciona directamente con el principio de legalidad de los actos y con el control de los hechos determinantes de la decisión administrativa. Para que prospere la pretensión de nulidad de un acto administrativo con fundamento en la causal denominada falsa motivación, la Sala ha señalado que “es necesario que se demuestre una de dos circunstancias: a) O bien que los hechos que la Administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa; o b) Que la Administración omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente”⁴³.

Por su parte, en cuanto a la falta o ausencia de motivación, ha señalado esta corporación lo siguiente⁴⁴:

“La motivación de un acto implica que la manifestación de la administración tiene una causa que la justifica y debe obedecer a criterios de legalidad, certeza de los hechos, debida calificación jurídica y apreciación razonable; los motivos en que se instituye el acto deben ser ciertos, claros y objetivos.

Los motivos del acto administrativo deben ser de tal índole, que determinen no sólo en la expedición de un acto administrativo sino su contenido y alcance; la motivación debe ser clara, puntual y suficiente, hasta tal punto que justifique la expedición de los actos y que suministre al destinatario las razones de hecho y de derecho que:

⁴¹ Artículo 18 Código Civil Colombiano

⁴² Corte Constitucional Sentencia C-1189 de 2000, Magistrado Ponente Carlos Gaviria Díaz,

⁴³ Sentencia de 23 de junio de 2011, Exp. 16090, CP. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

⁴⁴ Sentencia de 13 de junio de 2013, Exp. 17495, CP. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, reiterada en sentencia de 1 de junio de 2016, Exp. 21702, CP. Martha Teresa Briceño de Valencia

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0469 del 18 de mayo de 2021, mediante la cual se adoptó una medida cautelar administrativa como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia, respecto del señor ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530.

inspiraron la producción de los mismos. En cuanto a la falta de motivación, la Sala recuerda que este cargo se denomina técnicamente expedición en forma irregular del acto. En efecto, cuando la Constitución o la ley mandan que ciertos actos se dicten de forma motivada y que esa motivación conste, al menos en forma sumaria, en el texto del acto administrativo, se está condicionando la forme del acto administrativo, el modo de expedirse. Si la Administración desatiende esos mandatos normativos, incurre en vicio de expedición irregular y, por ende, so configura la nulidad del acto administrativo⁴⁵. En efecto, la expresión de los motivos por los cuales se profiere un acto administrativo de carácter particular y concreto es indispensable, pues es a partir de los mismos que el administrado puede controvertir aquellos aspectos de hecho y de derecho que considera no pueden ser el soporte de la decisión, pero cuando se prescinde de la motivación se impide que el particular afectado con la decisión pueda ejercitar cabalmente su derecho de defensa y contradicción".

Como vemos, no existe una “*indebida motivación*” en la Resolución 0469 de 2021 por cuanto la responsabilidad del señor Esteban Pinto Salazar fue debidamente sustentada a partir del acervo probatorio recabado en la actuación administrativa y que reposa en el correspondiente informe de inspección, cuyos hallazgos principales fueron presentados en el numeral décimo sexto de ese acto, relacionando cada hecho con su correspondiente medio de prueba.

En el mismo sentido tampoco existe ausencia de motivación del acto objeto de revisión, pues en el mismo se explica de manera detallada la normatividad aplicable que no es otra que la justificación de esta Superintendencia para actuar y adoptar medidas cautelares, la cual tiene su fundamento en preceptos constitucionales y legales, las cuales se han puesto de presente en el presente acto.

De otra parte, resulta importante pronunciarse respecto de la información allegada en lo que el recurrente denominó “*Anexo Cumplimiento de Orden Administrativa*” en el que precisa “*retirado de todos los medios de promoción o publicidad utilizados, incluidas mis redes sociales, cualquier término, palabra o alusión por la cual se pueda dar a entender equivocadamente al público en general, que me encuentro autorizado para promocionar los productos y/o servicios de la institución extranjera OMEGAPRO, a residentes colombianos para la realización de operaciones propias del mercado de valores, ni de cualquier otra sociedad domiciliada en el extranjero que no cuente con la respectiva autorización por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia*” en cumplimiento de la Resolución 0469 del 18 de mayo de 2021 y advierte que “*tal procedimiento lo he realizado conforme aquella información que conozco, está a mi alcance y de la cual soy responsable, en tanto, aquella que no se encuentra en mi dominio o por alguna razón se encuentra por fuera de mi alcance, no soy responsable de la misma, pues me es imposible proceder a su retiro o eliminación*”.

Al respecto, resta indicar que la medida cautelar impuesta de suspensión de actividades tiene plena relación causal para lograr detener la promoción no autorizada de productos y/o servicios de OMEGAPRO a residentes colombianos, efectuada por el señor Esteban Pinto Salazar; así, las órdenes impartidas en el acto que se recurre constituyen un imperativo cuyo alcance no es nada diferente a lo allí descrito, lo que impone en cabeza del administrado la carga de eliminar cualquier registro con ocasión de su participación directa en la actividad no autorizada, lo que supone que el destinatario de la medida administrativa conozca el alcance de sus actuaciones, con ello se detiene la actividad ilegal, so pena de ser acreedora de las sanciones pecuniarias correspondientes.

Por ultimo frente a la solicitud del recurrente del cese de la investigación por parte de esta Superintendencia, relacionada con los hechos y argumentos abordados en el recurso, es de anotar que la etapa de investigación se encuentra concluida y, en todo caso, se reitera que el recurso de reposición tiene por finalidad que el administrado solicite, en la instancia en la que se produjo el acto administrativo, la aclaración, modificación, adición o que se revoque dicho acto, cuando el mismo lesione los derechos de los administrados y no la exclusión del sujeto de la medida de la actuación misma.

Así mismo, respecto de su petición de ordenar la publicación de la decisión que revoca la medida en su contra en un diario de amplia circulación nacional, se aclara que el acto administrativo por medio del cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0469 del 18 de mayo de 2021 se

⁴⁵ Sentencia de 23 de junio de 2011, Exp. 16090, CP. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0698 DE 2021

Hoja No. 26

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0469 del 18 de mayo de 2021, mediante la cual se adoptó una medida cautelar administrativa como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia, respecto del señor ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530.

publica en un diario circulación nacional, en el sentido de confirmar de acuerdo a las motivaciones expuestas a lo largo de este acto.

SÉXTO. Que las consideraciones expuestas en precedencia recogen las conclusiones y resultados del análisis que llevó a cabo esta Superintendencia frente a cada uno de los motivos de inconformidad planteados en el recurso, sin que se encuentren argumentos válidos y ciertos, ni elementos probatorios que desvirtúen las motivaciones que le sirvieron de fundamento para ordenar la medida de intervención señalada en su contra.

En mérito de lo anterior, este Despacho,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución 0469 del 18 de mayo de 2021 mediante la cual se adoptó una medida cautelar administrativa como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos y/o servicios financieros o del mercado de valores a residentes en el país de una institución del exterior no autorizada para desarrollar esa actividad en Colombia, respecto del señor ESTEBAN PINTO SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía número 94.457.530 y siete personas más.

ARTÍCULO SEGUNDO. ORDENAR la publicación de la parte resolutive de este acto administrativo en un diario de circulación nacional, indicando que se trata de actividades no autorizadas que resultan del ofrecimiento, promoción y publicidad de productos o servicios del mercado de valores, incluido el mercado FOREX a residentes en el país, de entidades extranjeras no autorizadas para el efecto en Colombia. Lo anterior de acuerdo con lo previsto en el párrafo 1º del numeral 1º del artículo 108 del EOSF.

ARTÍCULO TERCERO. ORDENAR la publicación de la presente Resolución en el Boletín del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Capítulo Superintendencia Financiera y en la página web de esta última Entidad.

ARTÍCULO CUARTO. REMITIR copia de esta Resolución al Grupo de Registro de esta Superintendencia para los efectos pertinentes

ARTÍCULO QUINTO. NOTIFICAR PERSONAL O SUBSIDIARIAMENTE POR AVISO según lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al señor ESTEBAN PINTO SALAZAR, el contenido de la presente Resolución, entregando copia de la misma, y advirtiéndole que contra ella no procede ningún recurso, quedando agotada la vía administrativa.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá D. C., a los trece (13) días del mes de julio de 2021.

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA EL CONSUMIDOR FINANCIERO,

ANGÉLICA MARÍA OSORIO VILLEGAS